



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito



CUESTIONES INTERSECTORIALES **Justicia de menores**

Manual de instrucciones
para la evaluación
de la justicia penal

CUESTIONES INTERSECTORIALES

Justicia de menores

Manual de instrucciones para la evaluación
de la justicia penal



ÍNDICE

PARTE A: NIÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY	1
1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. SINOPSIS	5
3. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO	8
3.1 MEDIDAS GENERALES.....	8
3.2 CONTACTO INICIAL	9
3.3 REMISIÓN.....	10
3.4 SENTENCIA	12
3.6 RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO	15
3.7 ATENCIÓN POSTERIOR A LA PUESTA EN LIBERTAD Y REINSERCIÓN.....	18
4. GRUPOS VULNERABLES	19
4.1 NIÑOS QUE VIVEN O TRABAJAN EN LA CALLE	19
4.2 NIÑOS SOLDADOS Y MIEMBROS DE BANDAS ARMADAS	19
4.3 NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY	19
5. GESTIÓN / COORDINACIÓN.....	21
5.1 INVESTIGACIÓN, FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y ELABORACIÓN DE PROGRAMAS.....	21
5.2 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA.....	22
5.3 CONTROL FISCAL Y PRESUPUESTOS	23
5.4 COORDINACIÓN Y ALIANZAS CON DONANTES.....	24
PARTE B. NIÑOS VÍCTIMAS Y TESTIGOS	25
3. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO	29
3.1 LEGISLACIÓN.....	29
3.2 MARCO INSTITUCIONAL	30
4. NIÑOS VÍCTIMAS	32
4.1 NIÑOS VÍCTIMAS DE LA TRATA.....	32
4.2 NIÑOS VÍCTIMAS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL	32
5. GESTIÓN / COORDINACIÓN.....	33
5.1 CUESTIONES GENERALES	33
5.2 CONTROL FISCAL Y PRESUPUESTOS	34
5.3 COORDINACIÓN DE DONANTES	34
5.4 INVESTIGACIÓN.....	35
ANEXO A. DOCUMENTOS BÁSICOS.....	37
ANEXO C. GUÍA O LISTA DE VERIFICACIÓN DEL EVALUADOR: NIÑOS VÍCTIMAS Y TESTIGOS	40

PARTE A: NIÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY

1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas destinados a dar un tratamiento diferenciado a los niños en conflicto con la ley existen desde hace más de un siglo. Comenzaron con el establecimiento de instituciones separadas para menores delincuentes y “en situación de riesgo”, y poco después se adoptaron disposiciones legislativas por las que se establecieron tribunales separados para menores. Aunque desde un primer momento han existido modelos diferentes, el enfoque predominante siempre ha sido velar por el bienestar de los menores, es decir, por el interés superior del niño. Ese enfoque parte de la idea de intervenciones que se rijan por ese interés, haciendo hincapié en las necesidades de los menores más que en los actos por ellos cometidos, y apoyándose en trabajadores sociales que presten asistencia profesional al tribunal. Con frecuencia, esos sistemas de justicia de menores tienen a su alrededor diversas instituciones terapéuticas y educativas para la rehabilitación y reinserción de los niños delincuentes o de los que se consideran “en situación de riesgo”. Existen otros sistemas de justicia de menores que podrían considerarse peculiares y que se basan en sistemas judiciales que se asemejan más a los sistemas de justicia penal para adultos, en comisiones administrativas o en otras instancias decisorias oficiosas¹. Por último, en algunos países, los niños en conflicto con la ley no reciben un tratamiento diferenciado o este es muy limitado. Por lo tanto, existe una gran variedad de formas y tipos de tribunales, servicios e instituciones que integran los sistemas de justicia de menores, y el presente manual de evaluación está destinado a aplicarse a todos ellos.

Las principales instancias y partes interesadas en la justicia de menores pueden ser las habituales del sistema de justicia penal en general (policía, fiscalía y tribunales) pero, en ocasiones, también pueden comprender varios otros funcionarios y proveedores de servicios, como asistentes sociales y agentes de libertad vigilada, autoridades locales, educadores de las centros de acogida y de reinserción de menores, funcionarios de prisiones, proveedores de servicios que ofrecen a las fiscalías programas alternativos para los niños en conflicto con la ley (proveedores de servicios de remisión²) y trabajadores comunitarios. Por último, en lo que respecta a los procesos de justicia restaurativa y los paneles de jueces legos, el ciudadano común también puede participar en los procesos de justicia penal en que se acusa a un menor de haber cometido algún delito.

En cuanto a los niños en conflicto con la ley, la idea central es que, dada su edad e inmadurez, los menores merecen un tratamiento separado y diferente del que reciben los adultos en los procesos penales. Ello se basa en la vulnerabilidad especial y la capacidad limitada de los menores, dado que aún se encuentran en una etapa formativa de su desarrollo. No solo cualquier medida que se adopte deberá evaluarse teniendo en cuenta el interés superior del menor, sino que también el sistema deberá satisfacer las necesidades de atención y desarrollo del niño para garantizar su reinserción en la sociedad como ciudadano respetuoso con la ley. Por lo tanto, los sistemas de justicia de menores no deberían centrarse únicamente en la naturaleza del delito cometido, sino también en las causas fundamentales de la comisión del hecho delictivo y las circunstancias particulares del menor implicado.

No obstante, en la práctica, el funcionamiento de muchos de los sistemas de justicia de menores, cuando no la mayoría, no se rige por la protección del interés supremo de la infancia, y los derechos del niño pueden verse afectados gravemente de diversas maneras. En un informe reciente de Defensa de los Niños - Internacional³ se indicó que existe más de un millón de niños tras las rejas de las cárceles, y que a menudo en otras instituciones vinculadas al sistema de justicia de menores se recurre a medidas de privación de libertad innecesariamente y por tiempos más largos de lo requerido. El período posterior a la detención, es decir, durante su prisión preventiva en la policía, es cuando el menor es más vulnerable porque es entonces cuando tiene más probabilidades de sufrir torturas y otras

formas de tratos crueles⁴. Incluso en los sistemas que presuntamente hacen hincapié en el bienestar de los menores, los derechos del niño pueden verse vulnerados cuando no se respetan las debidas garantías procesales más elementales, cuando se autorizan intervenciones respecto de delitos que, en otras circunstancias, no habrían captado la atención de las autoridades, y cuando se recurre a medidas de privación de libertad en centros de atención y enseñanza como instrumento principal de respuesta a los delitos cometidos por menores.

Con frecuencia, el sistema de justicia de menores de un país está vinculado íntegramente a servicios prestados en otros sectores de la sociedad como, por ejemplo, el acceso a la enseñanza en general, a la asistencia sanitaria y a los servicios sociales. Numerosos estudios han puesto de relieve la correlación existente entre las familias disfuncionales, la sociedad y la delincuencia juvenil. Por consiguiente, para evaluar el sistema de justicia penal de un país, es probable que el evaluador deba tomar en consideración factores sociales y aspectos del desarrollo que caen fuera del ámbito de la justicia penal.

El derecho internacional en materia de justicia de menores es sustancial y detallado, y quizás también quepa tener en cuenta otros instrumentos más generales del ámbito de la justicia penal y de la política penal. Los principales instrumentos relativos a los derechos del niño son la **Convención sobre los Derechos del Niño** (1989), las **Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores** (1985), las **Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad** (1990), las **Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil** (1990) y las **Directrices de Acción de las Naciones Unidas sobre el niño en el sistema de justicia penal** (1997). El **Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación** de 1999 (Convenio 182) es un instrumento reciente que se centra específicamente en el niño y reviste vital importancia para la justicia de menores dado que en él se define la utilización de niños por otros menores o adultos para cometer acciones delictivas como la peor forma de trabajo infantil. Entre otros instrumentos de aplicación general figuran las **Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)**, los **Principios básicos de las Naciones Unidas sobre la utilización de programas de justicia reformativa en materia penal**, las **Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos**, la **Convención contra la Tortura** y el **Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura**. En el plano regional, la **Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño** contiene disposiciones específicas sobre la justicia de menores.

En el presente módulo se hará hincapié en los instrumentos que se refieren específicamente a los niños.

El **Manual para cuantificar los indicadores de la justicia de menores** elaborado por el UNICEF y la UNODC (abril de 2006) es un importante documento reciente que ha servido de guía para la preparación del presente módulo y en el que se ha tratado de definir y elaborar indicadores mundiales para ese sector. En él se definen 15 indicadores, todos establecidos teniendo en cuenta su viabilidad, los cuales ayudarán a los funcionarios locales y nacionales a evaluar el nivel de funcionamiento y eficacia del sistema de justicia de menores del que son responsables. Los 15 indicadores se dividen en 11 indicadores cuantitativos y cuatro indicadores de políticas. Los indicadores cuantitativos se subdividen a su vez en “mediciones de tipo ‘instantánea fotográfica’” y mediciones que deben realizarse a lo largo de determinado período (12 meses en algunos casos).

Cuatro de los 11 indicadores cuantitativos se consideran fundamentales. Los 15 indicadores de justicia de menores son importantes para la evaluación de la situación de los niños en conflicto con la ley. Sin embargo, cuando un país no pueda cuantificar los 15 indicadores, debería darse prioridad a los indicadores fundamentales.

Indicador	Definición
Indicadores cuantitativos	
1. Niños en conflicto con la ley	<ul style="list-style-type: none"> Número de niños detenidos en un período de 12 meses por cada 100.000 niños
2. Niños privados de libertad (FUNDAMENTAL)	<ul style="list-style-type: none"> Número de niños privados de libertad por cada 100.000 niños
3. Niños privados de libertad antes de la sentencia (FUNDAMENTAL)	<ul style="list-style-type: none"> Número de niños privados de libertad antes de la sentencia por cada 100.000 niños
4. Duración de la privación de libertad antes de la sentencia	<ul style="list-style-type: none"> Tiempo de privación de libertad antes de la sentencia
5. Duración de la privación de libertad impuesta por la sentencia	<ul style="list-style-type: none"> Tiempo de privación de libertad después de pronunciada la sentencia
6. Niños fallecidos durante el período de privación de libertad	<ul style="list-style-type: none"> Número de niños fallecidos durante un período de 12 meses por cada 1.000 niños privados de libertad
7. Separación de los adultos	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de niños privados de libertad que no están totalmente separados de los adultos
8. Contacto con padres y familiares	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de niños privados de libertad que han recibido la visita de sus padres, tutores u otros familiares adultos, o que han visitado a esas personas, a lo largo de los últimos tres meses
9. Sentencias privativas de libertad (FUNDAMENTAL)	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de niños que reciben sentencias privativas de libertad
10. Remisión previa a la sentencia (FUNDAMENTAL)	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de niños cuyo caso ha sido remitido o que, una vez condenados, se benefician de una pena sustitutiva
11. Atención después de la puesta en libertad	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de niños puestos en libertad que son objeto de atención
Indicadores de políticas	
12. Inspecciones independientes periódicas	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de un sistema que garantiza la realización de inspecciones independientes periódicas de los lugares de detención Porcentaje de los lugares de detención que han sido objeto de inspecciones independientes a lo largo de los últimos 12 meses
13. Mecanismo de presentación de quejas	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de un sistema de presentación de quejas para los niños privados de libertad Porcentaje de los lugares de detención que disponen de un sistema de presentación de quejas
14. Sistema especializado de justicia de menores (FUNDAMENTAL)	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de un sistema especializado de justicia de menores
15. Prevención	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de un plan nacional para prevenir la participación de niños en la comisión de infracciones o delitos

Los cuatro principios que sirven de base a la aplicación de la **Convención sobre los Derechos del Niño** en su conjunto, incluidas las disposiciones sobre justicia de menores, son los siguientes:

- El interés superior del niño, que será una consideración primordial en todas las medidas concernientes a los niños, (artículo 3).
- El principio de no discriminación, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales, (artículo 2).
- El derecho del niño a la supervivencia y el desarrollo, (artículo 6).
- El derecho del niño a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten y, en particular, se le dará la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, (artículo 12).

En las **Directrices de Acción de las Naciones Unidas sobre el niño en el sistema de justicia penal** (1997) se recomienda que, al aplicar las Directrices, se preste atención a los aspectos siguientes:

- El respeto de la dignidad humana, compatible con los cuatro principios generales en los que se inspira la Convención, a saber: la no discriminación, incluidos los aspectos de igualdad entre el hombre y la mujer; la defensa del interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto de las opiniones del niño;
- Una orientación basada en los derechos;
- Un planteamiento integral que maximice los recursos y la labor;
- La integración de los servicios con carácter interdisciplinario;
- La participación de los niños y los sectores interesados de la sociedad;
- La preparación de asociados mediante un proceso de desarrollo;
- La sostenibilidad sin tener que seguir dependiendo de órganos externos;
- La aplicación equitativa y el acceso para los más necesitados;
- La rendición de cuentas y la transparencia de las operaciones;
- Un planteamiento activo basado en medidas preventivas y correctivas eficaces⁵.

En la Convención sobre los Derechos del Niño se establece el límite superior de la infancia en los 18 años, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Por lo tanto, en teoría todo sistema de justicia de menores independiente debería aplicarse a todas las personas con edades inferiores a los 18 años. En el plano internacional, existen numerosos sistemas de justicia de menores especializados que excluyen a determinados niños de su campo de aplicación, bien atendiendo a la edad, como en Escocia, donde el “*Children’s Hearing system*” se aplica a los menores de 16 años, o bien en dependencia del delito cometido, como en los Estados Unidos, donde los tribunales de menores pueden ser declarados no competentes y los menores pueden ser procesados por un tribunal para adultos. En determinados países puede haber más de una edad mínima para determinar la responsabilidad penal en dependencia de la categoría del delito cometido. El presente módulo se aplica a todos los niños menores de 18 años, de acuerdo con la norma internacional consagrada en la Convención que define el concepto de niño, e independientemente de si el sistema hace una distinción entre niños y jóvenes de mayor edad al considerar, por ejemplo, a los niños de mayor edad como “jóvenes” o como adultos en lugar de niños. Por ello, el evaluador deberá tener en cuenta que existen sistemas diferentes.

En algunos países, el sistema de justicia de menores también se extiende a jóvenes adultos de más de 18 años, generalmente con edades comprendidas entre 18 y 21 años. A la hora de medir los indicadores de justicia de menores, el UNICEF y la UNODC recomiendan no considerar esa categoría de delincuentes de mayor edad como parte de la información requerida para cuantificar los indicadores de la justicia de menores, si bien los módulos proporcionados en su Manual podrían aplicarse (de manera separada). Por razones de coherencia, en el presente módulo se ha adoptado el mismo enfoque, a saber, que en términos generales el sistema de justicia de menores se define como el sistema que se aplica a los menores de 18 años en conflicto con la ley.

En lo que respecta al límite de edad inferior, las disposiciones resultan menos claras, como queda patente en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 40, por el que se exige el establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales, sin especificar una edad concreta. El órgano de vigilancia del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño ha considerado de manera sistemática cualquier edad inferior a los 10 años como demasiado baja, teniendo en cuenta la madurez y el nivel de desarrollo del niño, y ha solicitado periódicamente a los países que eleven la edad mínima de la capacidad penal a los 12 años o más. En el plano internacional, existe una disparidad considerable entre los países que han fijado una edad mínima, ya que esta puede oscilar entre los siete años en muchos países del *common law* y los 16 años en Mozambique.

En determinados países, la verificación de la edad de una persona para determinar si es mayor de edad o no resulta complicada dada la ausencia de programas eficaces de inscripción de nacimientos y la ausencia de medios accesibles y verificables para determinar la edad, y en ocasiones la identidad, de una persona. En esos países, la reunión de datos sobre la administración de la justicia de menores puede verse frustrada por el hecho de que las autoridades policiales falsifican las edades de los delincuentes juveniles para eludir los trámites establecidos para los casos relacionados con menores delincuentes. En las **Directrices de Acción de las Naciones Unidas sobre el niño en el sistema de justicia penal** se estipula que los Estados deberán velar por que sus programas de inscripción de nacimientos sean eficaces, pero en los casos en que se desconozca la edad del niño en conflicto con el sistema de justicia, se recomienda que se adopten medidas para cerciorarse de la verdadera edad del niño mediante una evaluación independiente y objetiva (directriz núm. 12).

En la Convención sobre los Derechos del Niño figuran otros principios que sirven de guía para el establecimiento y aplicación de los sistemas de justicia de menores, de los cuales cabría destacar de manera especial los seis que se enumeran a continuación:

- Todo niño privado de libertad⁶ estará separado de los adultos (personas con una edad igual o superior a 18 años (artículo 37 c)).
- La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda (artículo 37 b)).
- La exigencia de que de todo niño en situación de conflicto con la ley sea tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que este asuma una función constructiva en la sociedad (artículo 40, párr. 1).
- La exigencia de que en todos los procesos de justicia de menores se respeten las garantías procesales pertinentes⁷ (artículo 40, párr. 2).
- La exigencia general de promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales (artículo 40, párr. 3).
- La exigencia de adoptar medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales (remisión), en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las salvaguardias legales (artículo 40, párr. 3 b)).

2. SINOPSIS

Consulte el módulo **Cuestiones intersectoriales: Información sobre la justicia penal** para obtener orientación acerca de la recopilación de los principales datos estadísticos de justicia penal que ayudarán a tener una visión general de la población penitenciaria, el número de delincuentes condenados a penas no privativas de libertad y la capacidad general del sistema de justicia penal objeto de evaluación.

A continuación se enumeran varios otros indicadores específicos del presente módulo. Dado que es posible que algunos países no dispongan de esta información de manera inmediata, se recomienda solicitarla con antelación.

Las fuentes de información escritas pueden ser las siguientes:

- Informes de los ministerios de justicia
- Informes de los ministerios de asuntos de la mujer, la juventud y la infancia
- Informes del Defensor del Menor
- Informes de las juntas de justicia de menores
- Informes del sistema penal, incluidos la fiscalía y los sistemas penitenciario y de libertad condicional
- Informes de la policía nacional sobre la delincuencia
- Informes anuales de los tribunales
- Informes de los ministerios de asuntos sociales o departamentos de seguridad social

- Informes de las comisiones de derechos humanos
- Informes de los servicios de asistencia jurídica
- Informes de organizaciones no gubernamentales relativos al sistema de justicia de menores o a otros aspectos conexos (por ejemplo, cárceles, remisión de casos).
- Informes de organizaciones que prestan servicios a menores en conflicto con la ley, incluidos servicios de prevención de la delincuencia y servicios de remisión
- Informes de instituciones de enseñanza o de formación habilitadas para acoger a menores condenados
- Informes de instituciones o servicios privados utilizados como opciones de detención o de cumplimiento de sentencias en relación con menores, o informes sobre esas instituciones o servicios
- Centros de tratamiento de drogodependientes a los que pueden remitirse menores por sentencia judicial
- Informes de entidades independientes encargadas de supervisar o inspeccionar los lugares en que se mantienen a menores privados de libertad
- Informes de donantes

Existe una gran variedad de fuentes de las que se puede obtener información pertinente, por ejemplo, los ministerios de justicia, los ministerios de asuntos sociales, los ministerios del interior, los funcionarios de categoría superior de los servicios de libertad condicional, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones donantes.

La información estadística sobre los sistemas de justicia de menores varía considerablemente de un país a otro, y el hecho de que algunos países no incluyan a todas las personas con edades inferiores a los 18 años en sus sistemas de justicia de menores y que en muchos países las estadísticas relativas a los menores delincuentes no estén desglosadas de las cifras generales (por ejemplo, estadísticas sobre los enjuiciamientos o sobre la detención) suele dificultar la obtención de datos significativos y pormenorizados. En cuanto a los sistemas en que se contempla la posibilidad de que algunos menores sean procesados por el sistema de justicia penal de adultos, quizás sea preciso consultar las estadísticas generales sobre justicia penal para determinar si se puede evaluar algún tipo de información separada relativa a los menores de 18 años.

Además, a las dificultades mencionadas se suma la existencia de sistemas “mixtos” en los que los tribunales de menores o los sistemas de justicia de menores también se ocupan de los menores que requieren atención y protección (menores que no han entrado en conflicto con la ley). Por ello, la detención del menor puede responder bien a una decisión del sistema de servicios sociales o de protección del menor, o bien del sistema de justicia penal de menores (o de adultos).

El UNICEF y la UNODC recomiendan que, a los efectos de los indicadores, el tipo de niños que hayan sido objeto de decisiones de la justicia ya sea por sentencia dictada por un tribunal de menores o de adultos sea el que dicte el alcance de la labor de indagación, lo que por lo tanto comprendería los menores que hayan sido detenidos de manera aparentemente injustificada, por ejemplo, porque corren el “riesgo de delinquir” o por su “situación irregular”⁸.

En lo que respecta a las dificultades asociadas a la edad, se recomienda encarecidamente al evaluador que tome en consideración la edad de todos los jóvenes que encuentre en los distintos entornos (tribunales, estaciones de policía, centros de detención), tanto la edad declarada por el propio menor como la indicada por el personal o el registro, puesto que las discrepancias servirán para determinar la realidad del sistema. Asimismo, se recomienda al evaluador que verifique cómo se ha determinado la edad indicada en el registro.

Las respuestas a las preguntas que figuran a continuación ayudarán al evaluador a establecer la exhaustividad y fiabilidad de los datos disponibles sobre los niños y el sistema de justicia de menores.

- A. ¿Cuántos menores de 18 años, independientemente de si se les considera niños, jóvenes o adultos, entran en contacto con el sistema de justicia penal cada año? ¿Esas estadísticas existen por separado en el marco de un sistema específico destinado a los presuntos autores de delitos menores de 18 años? De no ser así, ¿qué fuentes es preciso consultar para determinar esa cifra? Si el sistema aplicable contempla que los menores puedan ser juzgados por tribunales para adultos, ¿en las estadísticas sobre la justicia penal de adultos se desglosa el número de menores de 18 años en conflicto con la ley?
- B. ¿Existen las estadísticas siguientes? En caso afirmativo, ¿con una periodicidad anual?
 - El número de niños cuyo caso ha sido objeto de remisión y ha salido del sistema de justicia penal
 - El número de enjuiciamientos de menores de 18 años

- El número de sentencias condenatorias dictadas contra menores de 18 años
 - El número de penas privativas de libertad impuestas a menores de 18 años
 - El número de menores en el país y la proporción de menores que han sido llevados ante la justicia de menores
- C. ¿Existen estadísticas sobre los niños privados de libertad en las siguientes categorías?
- Niños en instituciones penitenciarias
 - Niños en centros de detención en régimen cerrado
 - Niños en prisión preventiva bajo custodia policial
 - Niños en centros de servicios sociales de menores a los que han sido remitidos por decisión del sistema de justicia de menores
- D. ¿Cuál es el perfil de los menores que han entrado en contacto con el sistema de justicia de menores?
- Por sexo
 - Por edad
 - Por grupo o minoría étnica
 - Por estatuto de ciudadanía (nacionales o extranjeros)
 - Existe algún otro grupo excesivamente representado en el sistema
 - Por categoría de delito, por ejemplo, violento o no violento
- E. ¿Existen estadísticas sobre el número de menores a los que se les han aplicado medidas alternativas a la privación de libertad a la espera de la celebración del juicio (puesta en libertad bajo fianza, supervisión domiciliaria, puesta en libertad bajo vigilancia de parientes)?
- F. ¿Existen estadísticas sobre la duración media de la prisión preventiva antes de la puesta en libertad o la condena? ¿La ley estipula un límite máximo de tiempo? ¿Se respeta ese límite?
- G. ¿Qué porcentaje de niños en el sistema de justicia de menores recibe asesoría jurídica?
- H. ¿Qué porcentaje de niños en el sistema de justicia de menores recibe una sentencia de privación de libertad? ¿Por qué tipo de delito? ¿La ley establece un límite máximo de duración de las penas privativas de libertad aplicadas a los niños?
- I. ¿Existen estadísticas sobre el porcentaje de niños en el sistema de justicia de menores que puedan considerarse que requieren medidas de protección especial, como los que viven o trabajan en la calle, los que carecen permanentemente de un entorno familiar, los discapacitados, y los refugiados, los inmigrantes y los extranjeros⁹?
- J. ¿Existen estadísticas sobre la reincidencia de menores que hayan sido declarados culpables de delitos penales, tanto sobre los que hayan recibido sanciones de tipo comunitario o a los que se hayan aplicado medidas sustitutivas, como sobre los que hayan sido privados de libertad en centros de servicios sociales o en instituciones de enseñanza o penales)?

3. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO

Al evaluar un país es importante no ceñirse exclusivamente a la capital o ciudades principales, sino abarcar todo el país. En muchos países es probable que en teoría el sistema existente se haya elaborado para cubrir la totalidad del país, pero que en la práctica existan instituciones separadas en una o dos ciudades solamente debido a la carencia de recursos o al reducido volumen de asuntos (supuesto o real). En esos casos, será importante evaluar qué tratamiento reciben los menores en las regiones que carecen de instituciones separadas, si se les envía a la capital o si son procesados por tribunales para adultos.

3.1 MEDIDAS GENERALES

- A. ¿La legislación contempla un sistema separado para la administración de la justicia de menores? De no ser así, ¿qué otro tipo de disposiciones legales del derecho penal general o de la legislación para la protección del menor se aplica específicamente a los niños en conflicto con la ley? ¿Cuándo fue la última vez que se revisó la legislación relativa a los niños en conflicto con la ley? De conformidad con esa legislación, ¿quiénes son las autoridades competentes para dirimir casos en los que estén implicados menores en conflicto con la ley? En caso de que exista una legislación específica en materia de justicia de menores, ¿existen otros tipos de leyes pertinentes, por ejemplo leyes relativas a la atención y protección de menores, leyes de enjuiciamiento penal, leyes penitenciarias o códigos penales, que repercutan en el sistema de justicia de menores?
- B. ¿Cómo se define al “niño” en relación con el sistema de justicia de menores? ¿La edad establecida es la misma para todos los grupos de niños acusados de cometer cualquier tipo de delito? ¿Existen mecanismos para determinar la edad correcta de las personas sospechosas de ser menores de edad cuando se enfrentan a procesos de justicia penal? ¿De qué tipo de mecanismo se trata (administrativo, jurídico o de otra índole)?
- C. ¿La ley (estatutaria o de otro tipo) estipula una edad mínima para la responsabilidad penal? ¿Esa edad es uniforme para todos los niños en la justicia de menores? ¿La edad mínima establecida resulta lo suficientemente elevada, es decir, no se trata de una edad muy temprana teniendo en cuenta la edad y madurez del niño? ¿Se han adoptado medidas de apoyo al margen de la justicia penal aplicables a los niños con edades inferiores a la edad mínima de responsabilidad penal que hayan podido entrar en conflicto con la ley? ¿Se ha revisado recientemente la edad mínima? ¿Se han dado casos de niños por debajo de la edad legal de responsabilidad penal a los que se les hayan imputado cargos penales?
- D. ¿El sistema de justicia de menores hace especial hincapié en el bienestar de los niños y se cumple el principio de la proporcionalidad? **Regla 5.1 de las Reglas de Beijing.**
- E. ¿En todas las etapas del proceso se respetan las garantías procesales básicas, como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones y el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a estos? **Regla 7.1 de las Reglas de Beijing.**
- F. ¿Se respeta el derecho de los menores a la intimidad en todo momento durante la detención, la celebración del juicio y los procesos posteriores? **Regla 8 de las Reglas de Beijing.** ¿Los procesos judiciales se celebran a puertas cerradas? ¿La prensa u otros medios de difusión tienen derecho a divulgar la identidad de los menores en conflicto con la ley?

- G. ¿La ley contempla la asistencia de los padres u otro tipo de asistencia para los menores en conflicto con la ley? **Artículo 40, párr. 2 b) iii) de la Convención sobre los Derechos del Niño.** ¿La ley exige que los padres o tutores sean informados cuando un menor pasa a disposición de la justicia de menores? De ser así, ¿ese procedimiento se aplica correctamente? ¿Los padres pueden estar presentes durante los procedimientos probatorios tales como las confesiones o la toma de huellas dactilares? ¿Los padres desempeñan alguna función en lo referente a la decisión de la sentencia en la justicia de menores?
- H. ¿Los menores pueden ser llevados ante la justicia de menores por acciones o comportamientos que, de ser adultos, no serían objeto de sanción o pasarían inadvertidos ante las autoridades (ausencias injustificadas, vida callejera, infracciones menores, desobediencia)?
- I. ¿Los menores acusados de cometer delitos graves son procesados por el mismo sistema que se ocupa de los menores acusados de delitos menos graves? De no ser así, ¿para qué delitos y para menores de qué edad existe un sistema separado? ¿Se priva a esos menores de los beneficios del sistema de justicia de menores? ¿Pueden recibir condenas similares a las de los adultos? ¿Pueden cumplir penas privativas de libertad en instituciones para adultos?
- J. ¿La ley contempla el derecho de los niños imputados en el sistema de justicia de menores a recibir la asistencia letrada? **Artículo 37 d) de la Convención sobre los Derechos del Niño.** ¿Existe ese servicio de manera gratuita en los casos en que, por razones económicas, el menor no pueda contratar los servicios de un abogado? ¿Existen normas jurídicas o reglamentarias por las que deben registrarse los abogados que defienden a niños llevados ante el sistema de justicia de menores? ¿Se verifica del cumplimiento de dichas normas y existen mecanismos a los que puedan recurrir los menores para manifestar su descontento con la asistencia letrada que reciben?
- K. ¿Los menores que requieran la asistencia de un intérprete disponen de ese servicio de manera gratuita durante todo el proceso penal? **Artículo 40, párr. 2 vi) de la Convención sobre los Derechos del Niño.**

3.2 CONTACTO INICIAL

- A. ¿Los contactos entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los menores en conflicto con la ley se gestionan de manera que se respete la personalidad jurídica del menor, se promueva su bienestar y se evite cualquier daño? ¿Los datos personales de los niños detenidos se registran por separado? ¿Un niño en conflicto con la ley puede ser objeto de remisión por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad sin necesidad de recurrir a un juicio ordinario? **Regla 11 de las Reglas de Beijing.**
- B. ¿Los agentes de policía cuya función principal sea tratar con menores en conflicto con la ley reciben la capacitación e instrucción pertinentes? **Regla 12 de las Reglas de Beijing.** ¿Esto sucede así en todo el país o solo en determinadas zonas geográficas? ¿La capacitación que reciben los agentes de policía incluye normalmente una capacitación especial sobre los derechos del niño, el desarrollo del niño y las normas internacionales aplicables a los niños?
- C. ¿Existen medidas que garanticen que solo se recurra a la prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible? **Regla 13 de las Reglas de Beijing.** ¿Los menores en prisión preventiva están separados de los delinquentes adultos? Mientras se encuentran bajo custodia, ¿los menores reciben la atención, la protección y toda la asistencia necesarias de acuerdo con

su edad, sexo y características individuales? **Regla 13 de las Reglas de Beijing.**
¿Existen diferencias dentro del mismo país a ese respecto?

- D. ¿La ley contempla suficientes medidas especiales que permitan evitar la prisión preventiva, como la custodia permanente, la supervisión estricta, la asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución de enseñanza? **Regla 13.2 de las Reglas de Beijing.**
- E. ¿A los niños en prisión preventiva se les dispensa el alojamiento, la comida, la ropa y la cama adecuados y en un entorno apropiado para ellos? ¿Tienen la posibilidad de hacer ejercicio y disfrutar de actividades recreativas? ¿El acceso a la enseñanza está garantizado? ¿A los niños en prisión preventiva se les garantiza el máximo acceso a los padres y familiares? ¿Así ha podido constatarlo por lo declarado por los menores y los padres durante las visitas?
- F. ¿Qué medidas se adoptan, incluso medidas jurídicas, para evitar que la policía inflija daños físicos o de otro tipo a los niños? ¿Qué mecanismos de seguimiento se aplican en caso de que se registre una queja por brutalidad policial o por vulneración de los derechos del niño? ¿En los casos de presunta mala conducta policial se lleva a cabo una investigación independiente e imparcial? ¿Se pueden consultar los registros de tales investigaciones y de las consiguientes medidas disciplinarias o de otra índole adoptadas contra los agentes policiales del caso?
- G. ¿Cuál es el plazo máximo autorizado entre el primer contacto con la policía y la puesta del niño a disposición de las autoridades competentes? ¿Se respeta ese plazo?

3.3 REMISIÓN

La remisión consiste en encauzar determinados casos al margen del sistema de justicia penal, normalmente sobre la base de determinadas condiciones. En los sistemas del *common law*, los fiscales puede recurrir a esa medida en virtud de su facultad discrecional, pero en los sistemas basados en el derecho romano puede ser el juez quien toma la decisión de remitir el caso. En numerosos sistemas, las decisiones de remisión son adoptadas en etapas más tempranas del proceso de justicia penal por otros profesionales como la policía mediante la aplicación de medidas cautelares, y cada vez son más las leyes que establecen el marco para un examen más riguroso de la remisión de los casos relacionados con menores. Normalmente la remisión se basa en el reconocimiento de la autoría de los hechos y en el compromiso de resarcir los daños causados por el delito, casi siempre mediante servicios de tipo comunitario o la indemnización de la víctima. Cuando se trata de niños, la remisión se traduce generalmente en su envío a algún tipo de programa, como los destinados a enseñar a los niños a desenvolverse en la vida cotidiana, los programas especializados relacionados con delitos sexuales o los programas de regulación y control de la agresividad. En el caso de la justicia de menores, la remisión representa uno de los elementos fundamentales de todo sistema eficaz. Con la remisión se evita que el menor acumule antecedentes penales y, por lo tanto, su estigmatización a una edad temprana y su "contaminación" debido al contacto con los procesos penales, se minimiza la privación de su libertad y su posible contacto con otros delincuentes más peligrosos, y se facilita que aproveche las valiosas enseñanzas impartidas en el marco de esos programas y adquiera responsabilidad social mediante la prestación de servicios de tipo comunitario o el resarcimiento del daño causado a la víctima, todo lo cual puede contribuir a prevenir su reincidencia.

- A. ¿El sistema de justicia de menores fomenta la aplicación de medidas alternativas del enjuiciamiento y los procesos judiciales? ¿Hasta qué punto se aplican esas medidas? ¿En qué fase del proceso de justicia de menores se puede aplicar la remisión? ¿Se puede recurrir a ella a lo largo de todo el proceso de justicia de menores?
- B. ¿La remisión está prevista por la ley? De no estarlo, ¿qué criterios se aplican para encauzar el tratamiento del caso de un menor al margen del sistema de justicia de menores? ¿Qué instancias están facultadas para decidir sobre la remisión (fiscal, fiscal de distrito, funcionario de bienestar de la infancia,

asistente social, secretario judicial)? ¿De qué información disponen dichas instancias para tomar la decisión de remitir un caso o no y cuáles son las razones principales en que se basa su decisión? ¿Esas personas reciben capacitación sobre los procesos y programas de remisión, los derechos del niño y las normas internacionales conexas? ¿Los niños tienen derecho a asistencia jurídica o de otra índole durante el proceso de remisión? ¿Cualquier caso puede ser objeto de remisión si las circunstancias del niño indican que esa es la mejor manera de velar por su interés superior? ¿La remisión requiere aprobación judicial? Véase la sección **ACCESO A LA JUSTICIA: LA FISCALÍA**, 3.3.2.

- C. ¿Los encargados de adoptar decisiones que deseen remitir un caso pueden recurrir a programas de servicio de tipo comunitario? ¿Se puede recurrir a esos programas tanto en casos de delitos menores como de mayor gravedad? ¿Existen programas específicos que se ocupen de problemas tales como los delitos sexuales y la violencia? ¿Todos los niños en conflicto con la ley pueden acceder en pie de igualdad a esos programas? ¿Los administradores y coordinadores de esos programas han recibido capacitación sobre el trato con niños en conflicto con la ley? ¿Se respetan las salvaguardias penales en los procesos y prácticas de remisión? ¿Existen normas mínimas que los proveedores de servicios deban respetar para garantizar el cumplimiento de los derechos del niño y promover la eficacia del programa?

Cabe citar como ejemplo las normas mínimas nacionales sobre remisión elaboradas y publicadas por Sudáfrica en 2005 por el Departamento de Desarrollo Social de ese país. En las normas 72 a 84 se establece lo siguiente:

- Los programas de remisión incluirán evaluaciones posteriores a la intervención que permitan medir los cambios operados en factores evaluados antes de la intervención
- Los programas de remisión serán razonablemente accesibles desde el punto de vista geográfico a todos los menores
- El programa estará adaptado a la edad del menor y a sus capacidades físicas y cognitivas
- En la elaboración de los programas de remisión se tendrán en cuenta los elementos cuya eficacia para reducir las conductas delictivas en niños y adolescentes haya quedado científicamente demostrada
- Tanto en el diseño como en las actividades de los programas de remisión se tratarán los factores directamente vinculados a la comisión de delitos, lo que probablemente reducirá el problema de reincidencia
- Los programas de remisión estarán dotados de un sistema que permita vigilar la calidad de su ejecución
- Los programas estarán dotados de un sistema que permita vigilar los progresos realizados por el menor, en particular en lo que respecta a su cumplimiento de las condiciones de su orden de remisión, y dejar constancia, cuando proceda, de los motivos de su incumplimiento
- La intensidad del programa de remisión (frecuencia y duración de las actividades) variará en dependencia del nivel de riesgo que se haya definido durante la evaluación del menor antes de la intervención (por ejemplo, se aplicarán servicios más intensivos en los casos de mayor riesgo y menos intensivos en los casos de menor riesgo)
- Un funcionario de categoría superior se ocupará de supervisar con regularidad al personal encargado de ejecutar el programa de remisión
- La manera en que se ejecute el programa deberá fomentar la participación activa de los menores delincuentes
- Los programas de remisión estarán sujetos a evaluaciones periódicas de sus resultados
- El personal del programa de remisión supervisará, durante el año posterior a la finalización de este, la conducta de los menores que hayan participado en el programa para cerciorarse del bienestar general del niño, prestando especial atención a las posibles nuevas manifestaciones de conducta delictiva.

- D. Si el programa de remisión no se está llevando a cabo o su aplicación es limitada, ¿a qué se debe? Por ejemplo, ¿no se permite a los fiscales retirar los cargos? ¿Los programas existentes se consideran ineficaces?

- E. ¿Se requiere el consentimiento del menor, o de sus padres o tutores, para cualquier medida de remisión que implique su participación en servicios de tipo comunitario o de otra índole? **Regla 11.3 de las Reglas de Beijing.**
- F. ¿Existen servicios de mediación a los que puedan recurrir las partes en un proceso? ¿Existe algún mecanismo o protocolo que permita definir cuándo procede la mediación? ¿Los familiares de los menores participan en la mediación?
- G. ¿Existen mecanismos de solución de controversias del derecho tradicional o consuetudinario que se utilicen para encauzar la remisión? ¿Cuándo se recurre a ellos en relación con la justicia de menores? ¿Se respetan en esos mecanismos los derechos fundamentales del niño, incluidos su derecho a la integridad física, su derecho a participar y otros derechos humanos básicos?
- H. ¿Existe un registro de los casos remitidos, con los datos desglosados de tal manera que aporten un perfil apropiado de las causas remitidas (por ejemplo, por edad, por delito cometido)? ¿Las estadísticas de las remisiones reflejan la igualdad de acceso de todos los niños a la remisión, o se constatan desigualdades debido a la zona geográfica, el origen étnico, el sexo, la raza u otros motivos de sesgo? ¿Cuál es la tasa de éxito de los programas de remisión en lo que respecta a la prevención de la reincidencia?

3.4 SENTENCIA

- A. Cuando el caso de un menor aún no ha sido objeto de remisión, ¿el menor está a disposición de la autoridad competente (por ejemplo, tribunal de asuntos de la familia, tribunal de menores, tribunal penal, otro tipo de tribunales, junta, consejo) que decidirá con arreglo a un juicio imparcial y justo? **Regla 14.1 de las Reglas de Beijing.**
- B. ¿La autoridad competente y sus miembros (jueces, fiscales, etc.) están especializados en tratar con niños en conflicto con la ley? ¿Los entornos y procedimientos están adaptados a los menores? ¿Las autoridades competentes han recibido formación específica sobre los derechos del niño y las normas internacionales y nacionales aplicables, y se selecciona a esas autoridades atendiendo a su conocimiento y respeto de dichos derechos y normas?
- C. ¿En todas las fases del proceso se respetan plenamente el derecho del niño a expresar su opinión y su derecho a participar? **Artículos 12.1 y 12.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño.** ¿Establece la ley que los encargados de adoptar decisiones deben permitir que el niño exprese su opinión y tomar esta en consideración, teniendo debidamente en cuenta la edad y madurez del niño? ¿Así ocurre en la práctica?
- D. Antes de que la autoridad dicte una resolución definitiva, ¿Se presentan en todos los casos, salvo en los casos de delitos menores, informes de las investigaciones realizadas sobre el medio social del niño elaborados por profesionales debidamente capacitados? **Regla 16 de las Reglas de Beijing.**
- E. ¿La decisión de las autoridades competentes refleja el principio según el cual solo se deberá recurrir a medidas de privación de libertad como último recurso y durante el período más breve que proceda? **Artículo 37 b) de la Convención sobre los Derechos del Niño.** Conforme al derecho y en la práctica, ¿la privación de libertad solo se impone en los casos en que el menor haya sido condenado por la comisión de un acto grave en el que concurra violencia o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada? **Regla 17.1 de las Reglas de Beijing.** ¿Durante el examen de los casos y en las resoluciones dictadas se consideran primordiales el bienestar y el interés

superior del menor? **Artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y regla 17.1 d) de las Reglas de Beijing.**

- F. ¿Están prohibidas la pena capital y las penas corporales para sancionar a los menores que hayan cometido algún delito? **Artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño y reglas 17.2 y 17.3 de las Reglas de Beijing.**
- G. ¿Las autoridades competentes pueden adoptar una amplia diversidad de decisiones para evitar en la medida de lo posible el confinamiento en establecimientos penitenciarios? ¿Se respeta y protege el derecho del niño a no ser separado de sus padres o familiares (salvo cuando las circunstancias de su caso así lo requieran)? **Artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño y regla 18 de las Reglas de Beijing.** ¿Las autoridades competentes recurren a esas decisiones?
- H. ¿Cuál es la demora media hasta que la autoridad competente comienza la tramitación de un caso? **Regla 20 de las Reglas de Beijing.** ¿Se priorizan los casos relacionados con menores?
- I. ¿Los registros de menores delincuentes son de carácter estrictamente confidencial y no pueden ser consultados por terceros? **Regla 21 de las Reglas de Beijing.**
- J. ¿Quién es el responsable de garantizar que las medidas alternativas impuestas por la autoridad competente se apliquen correctamente? ¿Quién es el responsable de supervisar tales medidas? ¿Esos profesionales han recibido capacitación al respecto y tienen la competencia profesional necesaria para facilitar la reinserción de los niños en la sociedad? ¿Las medidas alternativas contribuyen a apoyar las iniciativas en materia de formación profesional, educación, vivienda y ayuda psicológica necesarias para el proceso de reinserción?
- K. ¿Los niños con necesidades especiales, como los drogodependientes o los dependientes de alguna otra sustancia, o niños con discapacidades físicas o mentales, disponen de servicios especializados?
- L. ¿Se pueden remitir casos a sistemas judiciales no estatales, por ejemplo, tribunales o instancias de mediación comunitarios o tribales? ¿Cuál es el porcentaje de casos relacionados con menores que han sido resueltos por ese tipo de sistemas y cuál ha sido su índice de eficacia en lo que respecta a la solución de controversias?
- M. Cuando se considera que un menor ha infringido las leyes penales, ¿las medidas impuestas por las autoridades competentes pueden ser objeto de revisión por parte de una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial? **Artículo 40, párr. 2 b) v) de la Convención sobre los Derechos del Niño.** ¿Las resoluciones dictadas que impliquen la privación de libertad están sujetas a revisión por una autoridad superior competente? ¿Esto es así en todos los casos? De no ser así, ¿qué decisiones están sujetas a revisión? ¿Qué porcentaje de decisiones y medidas son revisadas por autoridades superiores?
- N. ¿Las autoridades competentes han determinado la existencia de casos en que adultos hayan utilizado a niños para cometer delitos, lo que constituye una de las peores formas de trabajo infantil a tenor del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Se han adoptado las medidas pertinentes para realizar un seguimiento tanto respecto de los adultos como para proteger a los niños del caso?

3.5 JUSTICIA RESTAURATIVA

- A. ¿La justicia restaurativa constituye un componente del sistema de justicia de menores? ¿La justicia restaurativa forma parte integrante del mecanismo de solución de controversias? De ser así, ¿quién gestiona los programas de justicia restaurativa? ¿Con qué frecuencia se recurre a ese tipo de justicia? Si no se aplica ese tipo de justicia, ¿a qué se debe?

Por **proceso restaurativo** se entiende todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participan de manera conjunta y activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. Entre los procesos restaurativos cabe citar la mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones para decidir condenas.

Por **programa de justicia restaurativa** se entiende todo programa que utilice procesos restaurativos e intente lograr resultados restaurativos.

Por **resultado restaurativo** se entiende un acuerdo logrado como consecuencia de un proceso restaurativo. Entre los resultados restaurativos se pueden incluir respuestas y programas como la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad, encaminados a atender a las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del delincuente¹⁰.

Los programas de justicia restaurativa se pueden utilizar en cualquier fase del sistema de justicia penal, a reserva de lo dispuesto en la legislación nacional. Cuando se utilizan antes o durante la celebración del juicio, pueden dar lugar a la remisión del caso al margen de la justicia penal, siempre previo acuerdo entre la víctima y el delincuente.

Los procesos de justicia restaurativa se pueden adaptar a diferentes contextos culturales y a las necesidades de diferentes comunidades, y se les considera especialmente convenientes para los sistemas de justicia de menores. El origen de la justicia restaurativa está en los procesos oficiosos de solución de controversias que siguen cumpliendo una importante función en numerosos países de África, Asia meridional y América Latina. La solución de controversias por medios oficiosos tiene lugar en contextos o instituciones judiciales no estatales y pueden variar desde negociaciones intrafamiliares muy abiertas hasta entidades cuasi estatales que aplican normas consuetudinarias para resolver controversias. Los sistemas de justicia no estatales son más accesibles para las personas con pocos recursos económicos y permiten la solución de controversias sin tener que recurrir a los largos procesos de la justicia penal ordinaria. También tienen inconvenientes, como la falta de un nivel adecuado de rendición de cuentas, la discriminación basada en la clase social, el sexo y el nivel económico, y la ausencia de garantías en materia de derechos humanos.

Consulte los módulos **MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD: REINSERCIÓN SOCIAL** y **ACCESO A LA JUSTICIA: LA FISCALÍA**, así como la publicación de la UNODC *Handbook on Restorative Justice*, para obtener más información sobre la cuestión.

- B. ¿Durante los procesos de justicia restaurativa se protegen los derechos del niño y se promueve la responsabilidad del menor?

En las **normas 85 a 87** de las **Normas y reglas mínimas de los programas de remisión de Sudáfrica** (2005) se trata concretamente la cuestión de los procesos restaurativos y se enuncia lo siguiente:

- Los detalles relativos a los participantes en la iniciativa de justicia restaurativa, así como las posibles consecuencias de esa iniciativa, serán examinados por todas las partes en el proceso antes de su participación.
- La participación en las iniciativas de justicia restaurativa será completamente voluntaria, tanto para el delincuente como para la víctima (es decir, libre de toda coacción).
- Uno de los objetivos fundamentales de las iniciativas de justicia restaurativa es aumentar la intervención de los menores en las decisiones adoptadas y su adhesión a las mismas.

En la **norma 89** se indica que uno de los objetivos fundamentales de las iniciativas de justicia restaurativa consiste en incrementar la percepción de equidad de los procesos.

C. ¿Los programas contienen elementos de justicia restaurativa?

Esto podría exigir un análisis de las actividades que efectivamente se llevan a cabo durante los programas para verificar si incluyen elementos de justicia restaurativa, como la reparación a la víctima, cartas de disculpa u otros medios de reconocimiento de la responsabilidad.

- D. ¿Se asigna una partida presupuestaria a la justicia restaurativa como elemento del sistema de justicia de menores? De ser así, ¿qué organismos o departamentos gubernamentales reciben financiación destinada a la justicia restaurativa? ¿El presupuesto resulta suficiente? ¿Quién se encarga de supervisar el gasto? Cuando una ONG ejecuta programas de justicia restaurativa, ¿recibe financiación a tales efectos? ¿Con arreglo a un contrato?
- E. ¿Qué resultados de los procesos de justicia restaurativa se asientan en registros? ¿Quién puede consultar esos registros? ¿Quién es el responsable de supervisar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados mediante un proceso de justicia restaurativa?

3.6 RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO

En el sentido en que se utiliza en el presente módulo, el régimen de internamiento se refiere a todos los lugares en que los menores se encuentran detenidos o privados de libertad de algún modo, y de los que no les está permitido salir sin autorización. En los sistemas de justicia de menores, esos lugares podrían comprender toda una gama de posibles entornos institucionales, incluso sociales, penitenciarios y de enseñanza.

- A. ¿Existen cifras anuales sobre el número de menores fallecidos mientras se hallaban en las distintas formas de custodia? ¿Qué medidas se prevén en el derecho penal, en el plano normativo y en la práctica para investigar los fallecimientos de menores detenidos y esclarecer sus circunstancias? Si se comunican las muertes ocurridas durante el régimen de detención, ¿se pueden consultar los informes de las investigaciones de dichas muertes?
- B. ¿En todas las formas de detención, se mantiene a los menores detenidos separados de los adultos, y los niños separados de las niñas? **Regla 26.3 de las Reglas de Beijing.** ¿Los menores que aún no han sido procesados permanecen separados de los menores ya condenados? ¿El sistema jurídico garantiza que ningún menor sea admitido en un centro de detención sin una orden válida de una autoridad judicial o administrativa u otra autoridad pública? **Regla 20 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.**
- C. ¿Los menores detenidos reciben la atención, la protección y todos los servicios necesarios (formación profesional, enseñanza y apoyo psicológico)? ¿El personal tiene la cualificación profesional necesaria y es seleccionado con rigor? **Reglas 81 y 82 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.** ¿El personal ha recibido formación en materia de psicología infantil, bienestar infantil y normas internacionales?
- D. ¿Ante qué autoridad debe responder el personal de los centros de detención de menores? ¿Cuál es la proporción de hombres y mujeres entre el personal? ¿Los centros cuentan con profesores, psicólogos, asistentes sociales y personal médico con formación especializada? ¿Esas personas forman parte del personal del centro o son asignados por los ministerios correspondientes (Salud, Educación, etc.)?
- E. En cuanto a la enseñanza y la formación profesional, ¿la formación impartida goza del reconocimiento del sistema de enseñanza general? ¿La enseñanza y la

formación profesional se imparten en diferentes niveles o clases de acuerdo con las necesidades de los niños?

- F. ¿Las medidas adoptadas resultan suficientes para garantizar que los menores privados de libertad no pierdan contacto con el mundo exterior? ¿Los padres y familiares pueden visitar al menos una vez a la semana a los menores internados? **Regla 26.5 de las Reglas de Beijing, regla 59 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.** ¿Se permite la visita de amigos y representantes legales? ¿Se permite la salida de los menores de los centros de detención para visitar sus hogares? ¿El personal del centro fomenta y promueve el contacto entre los menores y sus padres o familiares? ¿Se permite el contacto con el mundo exterior, incluida la salida del establecimiento por motivos educativos o de formación profesional?
- G. ¿Son satisfactorias las condiciones de los centros de detención de menores en lo que respecta a los aspectos siguientes?:
- Alimentación adecuada y correctamente preparada, servida a las horas normales de comida
 - Agua potable
 - Iluminación y ventilación
 - Salubridad e higiene
 - Instalaciones sanitarias
 - Ropa
 - Dormitorios, acceso a suficiente ropa de cama y calefacción
 - Espacio suficiente
 - Espacios para la intimidad y espacios para relacionarse con demás menores del centro
 - Oportunidades para practicar deporte y para realizar actividades cotidianas útiles
 - Acceso a material de lectura y a otros materiales de índole recreativa, incluidos diarios y otras publicaciones periódicas, y acceso a otros medios de difusión (radio y televisión)
 - Supervisión adecuada por el personal
 - Medidas eficaces para minimizar el riesgo de incendio
 - Mecanismos de presentación de quejas y peticiones
- H. ¿Los centros que acogen a menores privados de libertad están sujetos a un sistema de inspecciones periódicas a cargo de un organismo debidamente constituido e independiente de la administración del centro de detención? **Regla 14 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad y Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, 2002.** ¿Existe un sistema de inspecciones periódicas y sin aviso de las instalaciones a cargo de inspectores cualificados? **Regla 72 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.** ¿El evaluador o el público en general pueden consultar los informes disponibles? ¿En las inspecciones participan funcionarios médicos especializados para evaluar el cumplimiento de las reglas relativas al ambiente físico, los servicios médicos, así como cualesquiera otros aspectos o condiciones de la vida del centro que afecten a la salud física y mental de los menores? **Regla 73 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.**
- I. ¿Se respetan las normas internacionales relativas a la admisión de menores a los lugares de detención, es decir, se les informa de sus derechos durante el período de detención en el momento de la admisión, se evalúan sus necesidades para planificar su detención y se facilita información a los menores acerca de las normas y reglamentos, así como sobre los mecanismos de presentación de quejas, a su llegada al centro? **Reglas 18, 24, 25 y 27 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.** ¿Se elabora por escrito un plan de tratamiento individual cuando se requiera un tratamiento rehabilitador especial?

- J. ¿Los centros de detención que acogen a menores disponen de registros adecuados, completos y protegidos en los que figure la siguiente información? **Reglas 21 y 22 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.**
- Datos relativos a la identidad del menor
 - Las circunstancias del internamiento, así como los motivos y la autoridad con que se ordenó
 - El día y hora del ingreso, el traslado y la liberación
 - Detalles de la notificación de cada ingreso, traslado o liberación del menor a los padres o tutores a cuyo cargo estuviese en el momento de ser internado
 - Detalles acerca de los problemas de salud física y mental conocidos, incluido el uso indebido de drogas y de alcohol
- K. ¿El transporte de menores se efectúa en vehículos debidamente ventilados e iluminados y en condiciones que no les impongan de modo alguno sufrimientos físicos o morales? **Regla 26 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.** ¿Se traslada a los menores de un centro a otro separados de los adultos? ¿Quiénes o qué autoridades se encargan del traslado de menores en el sistema de justicia de menores de un centro de detención a otro?
- L. ¿Se protegen adecuadamente los derechos religiosos, culturales y de otra índole de los menores detenidos? ¿Los menores que desconozcan el idioma utilizado en la institución tienen derecho a los servicios gratuitos de un intérprete siempre que sea necesario, en particular durante los reconocimientos médicos y las actuaciones disciplinarias? **Regla 6 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.**
- M. ¿En todas las instituciones que acogen a menores privados de libertad existen normas que garanticen que solo se recurrirá a los instrumentos de coerción de manera excepcional cuando se hayan agotado todos los demás métodos de control? ¿En todos los centros vinculados al sistema de justicia de menores está prohibido recurrir a los castigos corporales como medida disciplinaria? ¿En todos los centros en que haya menores detenidos se prohíbe al personal portar y utilizar armas? **Regla 65 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.**
- N. ¿Por qué disposiciones jurídicas y reglamentos se rigen los regímenes disciplinarios de todos los centros de menores (educativos, sociales y penitenciarios)? ¿Esas normas y reglamentos son compatibles con el respeto de la dignidad inherente del menor? ¿Está prohibida la reclusión en celda oscura, las penas de aislamiento o de celda solitaria, la reducción de alimentos, la restricción o denegación de contacto con familiares, los castigos colectivos o cualquier otra forma que constituya un trato cruel, inhumano o degradante? **Regla 66 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.**
- O. ¿Existe un mecanismo de presentación de quejas al que puedan recurrir los niños privados de libertad¹¹? ¿Los menores privados de libertad tienen derecho a presentar quejas o formular peticiones al responsable del centro o a su representante autorizado? ¿Tienen derecho a recibir una respuesta rápida a las peticiones o quejas presentadas? ¿El mecanismo de presentación de quejas está protegido por ley o por políticas? ¿Es eficiente? ¿Eficaz?
- P. Cuando los niños están privados de libertad en instituciones de gestión privada (no estatales), ¿las autoridades estatales disponen de los mecanismos adecuados para supervisar los servicios prestados y proteger los derechos del menor? ¿La ley contempla esa función supervisora? ¿Con qué frecuencia las autoridades estatales evalúan y supervisan los servicios prestados por instituciones privadas? ¿De qué recursos disponen los menores reclusos en instituciones privadas que hayan violado sus derechos?

3.7 ATENCIÓN POSTERIOR A LA PUESTA EN LIBERTAD Y REINSERCIÓN

- A. ¿Existen disposiciones jurídicas que contemplen programas de liberación anticipada destinados a los menores? ¿Se trata de programas diferentes a los destinados a los adultos?
- B. ¿Existen servicios especializados, como los de libertad condicional, para la vigilancia y supervisión de los menores después de dictada la sentencia firme o de la puesta en libertad del menor detenido? ¿Se dispone de personal capacitado específicamente a esos efectos?
- C. ¿Qué disposiciones, en caso de que las haya, figuran en la legislación y los reglamentos en cuanto a la prestación de apoyo social a los menores y su enseñanza tras su liberación de cualquier lugar en que se les haya mantenido privados de libertad por haber infringido la ley?
- D. ¿Una vez liberados, los menores provenientes de instituciones en que se les ha mantenido privados de libertad reciben asistencia en lo referente a los siguientes aspectos?:
 - Una vivienda aceptable
 - Empleo
 - Medios suficientes para que puedan mantenerse después de su liberación y facilitar su reinserción **Regla 80 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.**
- E. ¿Qué ocurre con los menores puestos en libertad cuando alcanzan la mayoría de edad? ¿Se contemplan medidas especiales de reinserción para esta categoría de jóvenes adultos?

4. GRUPOS VULNERABLES

4.1 NIÑOS QUE VIVEN O TRABAJAN EN LA CALLE

- A. Cuando se trata de niños de la calle, ¿los “delitos en razón de su condición” (por ejemplo, ausencias injustificadas y desobediencia) se interpretan siempre velando por el interés superior del menor? ¿Los arrestos de niños de la calle se realizan respetando debidamente las normas internacionales sobre los derechos del niño? ¿Se respeta en todo momento el derecho a no ser privado de la libertad ilegal o arbitrariamente (**Artículo 37 b) de la Convención sobre los Derechos del Niño**) cuando se trata de niños de la calle? ¿Existen mecanismos para controlar y prevenir la violencia sistemática contra los niños de la calle?
- B. ¿La venta de pegamento o disolventes a menores está prohibida o regulada por ley? ¿Se prohíbe la utilización de menores para cualquier forma de mendicidad?
- C. ¿Existen leyes y programas que estipulen servicios eficaces de reinserción y apoyo material a los niños de la calle? ¿Las autoridades policiales están obligadas a notificar la detención de niños de la calle a los servicios sociales o a las organizaciones no gubernamentales? ¿Se presta asistencia jurídica a los niños de la calle en el marco del sistema de justicia de menores?

4.2 NIÑOS SOLDADOS Y MIEMBROS DE BANDAS ARMADAS

La existencia de niños soldados es una de las tendencias más alarmantes en lo que respecta a los menores y los conflictos armados. Hoy en día hay niños luchando en prácticamente todos los conflictos armados importantes del mundo¹². A menudo los niños que han sido soldados corren el riesgo de convertirse en delincuentes una vez finalizado el conflicto debido a la ausencia de alternativas y de programas de reinserción y a dificultades como la estigmatización, la pérdida de los vínculos familiares y la adicción a las drogas o el alcohol.

- A. ¿Hay niños soldados o antiguos niños soldados en el país? De ser así, ¿existe un programa oficial de desmovilización, desarme y reinserción? ¿El programa abarca a todos esos niños y ha arrojado buenos resultados?
- B. En el caso de niños implicados en actos de violencia armada y bandas, ¿se han puesto en marcha programas especiales de prevención? Al someter a un niño soldado a un proceso de justicia penal, ¿se toma debidamente en consideración la manera en que el menor se alistó en las fuerzas del gobierno o se unió a un grupo armado, ya sea voluntariamente o por la fuerza)? ¿El sistema de justicia penal considera como circunstancias atenuantes el hecho de que la pérdida de alguno de los progenitores o de los dos o la pobreza hayan podido motivar el alistamiento de un niño soldado o su incorporación a una banda?
- C. ¿Se han tipificado delitos específicos relacionados con la participación en bandas armadas? De ser así, ¿cómo garantiza el sistema el tratamiento individualizado de cada menor y el respeto de las normas internacionales?

4.3 NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY

Habida cuenta que solo una pequeña proporción de los delincuentes que entran en contacto con el sistema de justicia penal son mujeres¹³, el número de niñas en conflicto con la ley, suele constituir un sector muy pequeño de la población de menores en conflicto con la ley en un país. Esto puede traducirse en un acceso más restringido a los servicios especializados, como las instituciones que sirven de apoyo al sistema de justicia de menores, ya sean educativas, penitenciarias o sociales, y

en la violación del principio de separación en todo momento de los menores y los adultos, puesto que con frecuencia las niñas están mezcladas con las mujeres adultas en los centros de detención. Las niñas detenidas también pueden tener necesidades particulares relacionadas con su sexo que el sistema quizás no atienda debidamente y pueden correr mayor riesgo de ser víctimas de abusos. En algunos países, se detiene a las niñas por “su propia protección” o por delitos por los que no se sanciona a los menores del sexo masculino, por ejemplo la prostitución. Asimismo, cabe destacar que aunque la proporción de niñas suele ser baja en comparación con los niños, en muchos países se está registrando una tendencia ascendente.

- A. ¿Cómo se trata a las niñas en conflicto con la ley? Al sometérselas a cualquier forma de privación de libertad, ¿se les mantiene en dependencias separadas de los niños y de los adultos, incluidas las reclusas adultas? ¿Gozan de los mismos derechos que los niños en el sistema de justicia de menores? Si se les interna en centros para mujeres, ¿se les coloca en dependencias separadas? ¿se garantiza su acceso a programas educativos y de formación profesional?
- B. ¿Las niñas tienen el mismo acceso que los niños a los distintos servicios, incluidas las resoluciones sustitutivas, y a programas educativos y de formación profesional? ¿Tienen acceso a las mismas instalaciones recreativas? ¿Se respetan sus necesidades higiénicas y sanitarias especiales?
- C. ¿Existen medidas especiales para proteger a las niñas de toda violencia durante su contacto con el sistema de justicia de menores? ¿El personal de las distintas instituciones ha recibido capacitación especializada y ha sido seleccionado específicamente para tratar con niñas? ¿Cuál es la proporción de empleados hombres y mujeres en los centros que acogen a niñas? ¿Las niñas que han sido víctimas de violencia reciben servicios de ayuda para su reinserción, incluso asistencia psicológica? ¿Existen informes de violaciones u otros tipos de actos violentos basados en el sexo cometidos en las instituciones? ¿Existen informes de investigaciones o medidas disciplinarias adoptadas contra miembros del personal por tales motivos?
- D. ¿Existen programas o servicios especiales destinados a las niñas en conflicto con la ley que quedan embarazadas? ¿Cómo procede el sistema de justicia penal en el caso de niñas embarazadas que entran en conflicto con la ley?

5. GESTIÓN / COORDINACIÓN

5.1 INVESTIGACIÓN, FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y ELABORACIÓN DE PROGRAMAS

En el comentario relativo a la **Regla 30 de las Reglas de Beijing** se señala que se ha reconocido ampliamente que la utilización de la investigación como base de una política racional de justicia de menores constituye un importante mecanismo para lograr que las medidas prácticas tengan en cuenta la evolución y el mejoramiento continuos del sistema de justicia de menores. En esa esfera es especialmente importante la influencia recíproca entre la investigación y las políticas debido a los cambios rápidos del estilo de vida de la juventud, los adelantos tecnológicos, las nuevas formas de la delincuencia de menores y los cambios en la respuesta de la sociedad y la justicia a la participación de menores en actos delictivos. La investigación también resulta fundamental para mejorar las intervenciones destinadas a combatir la comisión de delitos por menores y promover una reinserción más eficaz. En el comentario se preconiza el criterio de que la investigación por parte de personas y órganos independientes debería recibir el respaldo de las agencias competentes.

- A. ¿Se ha investigado sobre las causas, las tendencias y los problemas relativos a la delincuencia juvenil? **Regla 30 de las Reglas de Beijing.** ¿Esos trabajos de investigación son de acceso público? ¿Se han utilizado esos trabajos como base de la planificación del desarrollo en el contexto del sistema de justicia de menores?
- B. ¿Se han llevado a cabo labores de investigación sobre cuestiones específicas del sistema de justicia de menores, por ejemplo, en qué medida se utiliza a los menores como instrumento para la realización de actividades delictivas¹⁴? ¿Existe información detallada basada en estudios científicos sobre la identidad, la prevalencia, las actividades y el funcionamiento de las bandas integradas por menores? ¿Se han realizado estudios sobre el alcance y la naturaleza del abuso de drogas y otras sustancias entre menores? ¿Se han realizado estudios sobre las causas que impulsan a determinados niños a vivir o trabajar en la calle, así como sobre la proporción de niños en esa situación? ¿Se han llevado a cabo estudios sobre las experiencias vividas por menores procedentes de grupos minoritarios en el sistema de justicia de menores, así como sobre la proporción excesiva de niños procedentes de esos grupos en dicho sistema? ¿Existe algún estudio sobre los niños implicados en actos de violencia armada organizada fuera de situaciones de conflicto¹⁵?
- C. ¿Existe una estrategia nacional, regional o local encaminada a reducir la participación de menores en bandas o a combatir su participación en actos de violencia armada organizada? ¿Se ha elaborado una estrategia nacional de reducción del uso indebido de drogas y otras sustancias que incluya medidas dirigidas específicamente a niños y jóvenes¹⁶? ¿Existe una estrategia destinada a prevenir que los niños vivan o trabajen en la calle y reducir el número de niños en esa situación? ¿Hasta qué punto se aplican estrategias nacionales contra la pobreza y programas de apoyo o asistencia social para evitar que los niños caigan en la delincuencia? ¿Esas estrategias se aplican y evalúan eficazmente?
- D. ¿Los trabajos de investigación sirven de base al análisis y la planificación sistemáticos dentro del sistema de justicia de menores o para rediseñar programas e intervenciones? ¿Existe un proceso ordinario y sistemático de recopilación de datos a fin de disponer de la información mínima necesaria para medir los indicadores elaborados por la UNODC y el UNICEF sobre la justicia de menores?
- E. ¿Existe un sistema de planificación orientado al perfeccionamiento continuo del sistema de justicia de menores? **Regla 30.4 de las Reglas de Beijing y directriz**

núm. 42 de las Directrices de Acción de las Naciones Unidas sobre el niño en el sistema de justicia penal. ¿En los planes se fijan prioridades claras encaminadas a garantizar mayor equidad y eficacia en los servicios del sistema de justicia de menores? ¿Con los planes se garantiza una mayor coordinación de los servicios, incluso los prestados por la comunidad, los voluntarios, las organizaciones no gubernamentales, los donantes y otros organismos?

5.2 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA

- A. ¿Existe una coordinación nacional, regional o local de los servicios de justicia de menores? ¿Cuáles son las partes interesadas que intervienen en dicha coordinación? ¿La ley estipula esa coordinación? ¿De qué autoridad depende el mecanismo de coordinación? ¿Existen informes escritos de acceso público? ¿Con qué frecuencia (trimestral, mensual) se reúne el mecanismo de coordinación? ¿El órgano coordinador abarca todos los aspectos del sistema de justicia de menores, es decir, la policía, los tribunales, la remisión de casos, la libertad condicional y todas las instituciones sociales, educativas o penitenciarias relacionadas con el sistema de justicia de menores? De no ser así, ¿existen mecanismos de coordinación separados que se ocupan de determinados aspectos del sistema?
- B. ¿Qué departamentos y ministerios u organismos participan en la prestación de servicios en la justicia de menores (fiscales, asistentes sociales, agentes de libertad condicional, policía, centros penitenciarios, etc.) y cómo estructura cada uno la gestión de esos servicios? ¿Cada institución dispone de una dependencia especializada en justicia de menores? ¿Los funcionarios que trabajan en esas dependencias especializadas reciben capacitación específica sobre los derechos del niño, así como sobre el desarrollo y la psicología infantiles?
- C. ¿Cómo se formulan las políticas en la esfera de la justicia de menores? ¿Cómo se revisan y aplican esas políticas? ¿Existen políticas escritas sobre aspectos de la justicia de menores, como normas mínimas para los programas de remisión, normas mínimas para el tratamiento de menores en instituciones vinculadas con el sistema de justicia de menores (instituciones sociales, educativas y penitenciarias), o directrices escritas para el ejercicio del poder discrecional de la fiscalía u otras instancias en lo que respecta a la remisión de casos?
- D. ¿Existen políticas escritas en que se estipule cuál debe ser el tratamiento dispensado a los menores por los proveedores de servicios, los funcionarios del gobierno y los organismos que se ocupan de los niños en el sistema de justicia de menores?
- E. ¿Se elaboran estadísticas sobre los niños en relación con todos los aspectos del sistema de justicia de menores y todos los órganos gubernamentales implicados, en particular en relación con las detenciones, el enjuiciamiento, las remisiones de casos y el pronunciamiento de sentencias? ¿Cómo se recopilan esos datos? ¿Se trata de estadísticas precisas? Si los datos se recopilan por medios automatizados, ¿quién es el responsable de la entrada de datos y qué mecanismos de control de calidad se aplican para garantizar la exactitud de estos? ¿Cómo se armoniza la recopilación de datos entre los diferentes organismos, por ejemplo, la policía y los tribunales? ¿Esa labor se realiza de manera manual? ¿Cómo se protegen los derechos de los menores a la intimidad y la confidencialidad?
- F. ¿El sistema de justicia de menores dispone de servicios prestados por organizaciones no gubernamentales? De ser así, ¿cómo se coordina el trabajo de esas organizaciones no gubernamentales con los organismos estatales del sistema de justicia de menores?

- G. ¿Se ha procurado asistencia técnica en la esfera de la justicia de menores a fin de fortalecer la capacidad y las infraestructuras nacionales en esa materia¹⁷? ¿Qué tipo de asistencia se ha solicitado o proporcionado? ¿Se evaluaron las repercusiones de dicha asistencia? ¿Se pueden consultar informes de evaluación?
- H. ¿El estado ha destinado recursos financieros o de otra índole al fortalecimiento de las actividades de proyectos encaminadas a promover la aplicación de las **Directrices de Acción de las Naciones Unidas sobre el niño en el sistema de justicia penal**? ¿De qué tipo de proyectos se trataba y dónde radicaban, dentro o fuera del país?
- I. ¿Existe un plan nacional de prevención de la participación de los niños en la comisión de delitos y la delincuencia juvenil¹⁸? ¿Se trata de un plan general y está estipulado por la ley o las políticas? ¿Contiene mecanismos para su aplicación y coordinación? ¿Incluye lo siguiente?:
- Apoyo a las familias
 - Redes locales de asistencia a los niños vulnerables
 - Servicios para familias de pocos ingresos y apoyo a horarios de trabajo flexibles
 - Oportunidades de empleo y de formación profesional para los menores
 - Prevención del uso indebido de drogas, alcohol y otras sustancias por los niños
 - Alternativas de la enseñanza académica
 - Actividades deportivas y culturales para menores

5.3 CONTROL FISCAL Y PRESUPUESTOS

- A. ¿Cómo se financia el sistema de justicia de menores? ¿Existe un presupuesto central para todas las funciones y los funcionarios vinculados al sistema de justicia de menores, o los distintos aspectos se asignan a diferentes departamentos gubernamentales (por ejemplo, la policía, la fiscalía, los servicios sociales y los servicios de libertad condicional)? De ser así, ¿quién determina las asignaciones presupuestarias? ¿Quién prepara y presenta el presupuesto? ¿Quién supervisa la utilización eficiente de las asignaciones presupuestarias?
- B. ¿Se pueden desglosar los gastos del sistema de justicia de menores y se pueden distinguir esos gastos en los procesos presupuestarios nacionales, provinciales o locales? En caso afirmativo, ¿qué proporción del presupuesto de la justicia penal representan? ¿Y qué proporción de los gastos destinados a los servicios para la infancia (protección de la infancia y servicios de bienestar social del niño)? ¿Se ha programado el costo total de la aplicación de un sistema de justicia de menores respetuoso de los derechos del niño teniendo en cuenta la necesidad de recurrir a diversas posibilidades de remisión de casos y resoluciones alternativas, como la atención, la orientación, las órdenes de supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y de otros tipos de formación, así como otras alternativas de la internación en instituciones? **Artículo 40.4 de la Convención sobre los Derechos del Niño.** ¿Se han adoptado disposiciones presupuestarias adecuadas en el sistema de la justicia de menores para el transporte de niños en condiciones dignas y seguras, y separados de los adultos?
- C. Si el presupuesto se ejecuta a escala nacional, regional o local, ¿resulta suficiente para sufragar los gastos relacionados con las tareas, los programas, las actividades y el personal? ¿Los centros de detención de menores disponen de recursos suficientes en relación con el número de niños que prevén acoger anualmente, a fin de satisfacer plenamente sus necesidades? ¿El presupuesto anual de los centros de detención para menores contempla la contratación de

suficiente personal para desempeñar las labores de atención y enseñanza y prestar apoyo psicosocial a los niños?

- D. En los casos en que existan asignaciones presupuestarias, ¿los fondos se reciben a tiempo? ¿Existen otras restricciones fiscales que dificulten la gestión correcta y el desarrollo del sistema de justicia de menores?
- E. Si las organizaciones no gubernamentales participan en la prestación de servicios en el sistema de justicia de menores, ¿cuáles son sus fuentes de financiación? ¿Reciben fondos del gobierno? De ser así, ¿los fondos que reciben resultan suficientes para prestar los servicios en cuestión? ¿Reciben fondos de organismos donantes? ¿Cómo pueden preservar su viabilidad presupuestaria las organizaciones no gubernamentales que prestan servicios en el sistema de justicia de menores?
- F. En los casos en que se haya determinado la existencia de uno o varios presupuestos destinados al funcionamiento del sistema de justicia de menores y los servicios conexos, ¿esa información es de acceso público? ¿De qué manera se rinde cuenta de la ejecución de los presupuestos?

5.4 COORDINACIÓN Y ALIANZAS CON DONANTES

- A. ¿Qué donantes o asociados para el desarrollo trabajan en el sector de la justicia de menores?
- B. ¿Existen planes estratégicos de donantes para coordinar e impartir orientación estratégica al desarrollo del sistema de justicia de menores?
- C. ¿Qué proyectos relacionados con la justicia de menores han contado con el apoyo de donantes? ¿Qué proyectos se ejecutan en la actualidad? ¿Los proyectos anteriores fueron objeto de evaluaciones y, de así ser, qué conclusiones se pueden extraer?
- D. ¿Qué vínculos existen entre los organismos donantes y los ministerios u otro tipo de organismos (por ejemplo, autoridades locales, tribunales administrativos, órganos profesionales de asistencia jurídica) que intervienen en el sistema de justicia de menores? ¿Cómo se gestionan las relaciones entre los organismos donantes y otros órganos? ¿Existe algún acuerdo oficial o documento de estrategia en vigor?
- E. ¿Se han establecido alianzas entre los organismos independientes, los órganos estatales del sistema de justicia de menores y otros profesionales de los servicios sociales que se ocupan de los niños en general, como las instituciones sanitarias y de enseñanza? **Directrices de Acción de las Naciones Unidas sobre el niño en el sistema de justicia penal, directriz núm. 42.**

PARTE B. NIÑOS VÍCTIMAS Y TESTIGOS

1. INTRODUCCIÓN

Millones de niños de todo el mundo sufren daños a causa de la delincuencia y el abuso de poder, lo que los hace entrar en contacto con el sistema de justicia penal. Dada la edad e inmadurez de los niños, su vulnerabilidad en los procesos de justicia penal exige la adopción de medidas especiales para garantizar la protección de sus derechos y una justicia adaptada a sus necesidades. En los últimos tiempos, las Naciones Unidas han hecho especial hincapié en la posición de las víctimas de la delincuencia en general y, en 2005, el Consejo Económico y Social aprobó las **Directrices de las Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos**. Esas directrices parten de las normas recogidas en otros tratados e instrumentos internacionales, en particular la **Convención sobre los Derechos del Niño**, y apuntan a principios y medidas de protección específicos que deberían aplicarse a los niños víctimas y testigos en los sistemas y procesos de justicia penal.

Los niños víctimas de delitos pueden comparecer como testigos en numerosas instancias jurídicas e institucionales, no solo en el ámbito de los procesos penales. Pueden comparecer en procedimientos judiciales relacionados con la guarda y tutela de menores, en procedimientos relacionados con la protección social, en calidad de demandantes en sobreseimientos o procedimientos disciplinarios, en procedimientos ante las instancias encargadas de dirimir asuntos de la familia, y en otros muchos contextos. Numerosas disposiciones de protección de menores enunciadas en la Convención sobre los Derechos del Niño se aplican a los niños víctimas y testigos, principalmente el artículo 19, por el que se prohíbe el uso de cualquier forma de violencia contra el niño mientras este se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, y se exige la adopción de procedimientos eficaces, programas sociales y medidas de observación ulterior de los casos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial, (artículo 19, párr. 2); el artículo 34, en el que se trata la cuestión de la explotación sexual de menores; y el artículo 39, por el que se exige a los Estados parte que adopten todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o conflictos armados. En el **Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía**, aprobado en 2000, se insta a los Estados parte a adoptar medidas adecuadas para proteger los derechos e intereses de los niños víctimas de las prácticas prohibidas en ese Protocolo. En el **Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional**¹⁹, que entró en vigor en 2003, resulta también pertinente, en particular sus artículos 6, 7 y 8.

Cada vez se elaboran más instrumentos internacionales para poner de relieve y tratar de resolver la cuestión de la vulnerabilidad especial de las víctimas y testigos, principalmente los niños testigos. A ese respecto resulta decisiva la **Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder**, 1985. Las **Directrices de Acción de las Naciones Unidas sobre el niño en el sistema de justicia penal** (1997) constituyen otro documento importante ya que en su parte III se incluyen planes orientados a los niños como víctimas y testigos. No obstante, ese documento se centra fundamentalmente en los niños víctimas y testigos en el sistema de justicia penal. Posteriormente, en 2005²⁰, se aprobaron las **Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos**, en las que se define un marco práctico para que se tengan más en cuenta las necesidades de los niños víctimas y testigos, incluso mediante reformas jurídicas, normas procesales y sobre la administración de pruebas, normas de comportamiento y capacitación de profesionales, así como la promoción del

derecho de las víctimas y testigos menores de 18 años a recibir una asistencia eficaz. En esas directrices se reconocen los principios intersectoriales de los derechos del niño a la dignidad, la no discriminación, el reconocimiento del interés superior del niño (que incluye el derecho a la protección²¹ y a la posibilidad de disfrutar de un desarrollo armonioso²²), y el derecho a la participación, que incluye el derecho del niño a expresar sus opiniones y a aportar su contribución, especialmente a las decisiones que le afecten, incluidas las adoptadas en el marco de cualquier proceso judicial, y a que esos puntos de vista sean tomados en consideración.

En las Directrices figuran dos definiciones importantes: en primer lugar, la definición de “profesionales”, que serán las personas que, en el contexto de su trabajo, estén en contacto con niños víctimas y testigos de delitos y, por lo tanto, para quienes sean aplicables las Directrices. Ese término incluye a los defensores de niños y víctimas y el personal de apoyo, los especialistas de servicios de protección de niños, el personal de organismos de asistencia pública infantil, los fiscales y, en su caso, los abogados defensores, el personal diplomático y consular, el personal de los programas contra la violencia en el hogar, los magistrados, el personal judicial, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los profesionales de los servicios de salud mental y física y los trabajadores sociales.

En segundo lugar, la definición de “proceso de justicia”, que constituye un concepto muy vasto. Abarca la detección del delito, la presentación de la denuncia, la instrucción de la causa, el enjuiciamiento y las actuaciones posteriores al juicio, independientemente de que la causa se haya visto ante un tribunal nacional, internacional o regional, para delincuentes adultos o menores, o por alguna vía consuetudinaria o extrajudicial de la administración de la justicia penal.

Directriz 6: “Las Directrices también podrían aplicarse a procesos extrajudiciales y consuetudinarios, como la justicia restaurativa, y en las ramas no penales del derecho, incluidas, aunque sin limitarse a ellas, las leyes relativas a la custodia, el divorcio, la adopción, la protección de los niños, la salud mental, la ciudadanía, la inmigración y los refugiados”.

En el futuro podrían resultar pertinentes las **Directrices de las Naciones Unidas para la protección y otros tipos de cuidado de los niños que carecen del cuidado de sus padres**, de cuya elaboración se están ocupando el UNICEF e International Social Services, en colaboración con el Grupo de Trabajo de las organizaciones no gubernamentales sobre los niños que carecen del cuidado de sus padres. El 5 de diciembre de 2006 se presentó un borrador exhaustivo en el que figuran algunos principios de importancia en lo que se refiere a otros tipos de cuidado y a la protección de los niños.

2. SINOPSIS

Consulte el módulo **Cuestiones intersectoriales: Información sobre la justicia penal** para obtener orientación acerca de la recopilación de datos estadísticos sobre la justicia penal fundamentales que le ayudarán a tener una idea general de la población carcelaria, el número de delincuentes condenados a sanciones no privativas de libertad y la capacidad general del sistema de justicia penal que está siendo objeto de evaluación.

A continuación se enumeran varios otros indicadores específicos del presente módulo. Dado que es posible que algunos países no dispongan de esta información de manera inmediata, se recomienda solicitarla con antelación.

- Informes de los ministerios de justicia
- Informes de los ministerios de asuntos de la mujer y la infancia, incluidos los informes sobre la victimización del niño que figuren en los registros nacionales de protección de menores
- Informes de la Junta de Justicia de Menores
- Informes del sistema penal, incluidos la fiscalía y los sistemas penitenciario y de libertad condicional
- Informes de la policía nacional sobre la delincuencia
- Informes anuales de los tribunales
- Informes de los ministerios de asuntos sociales o departamentos de seguridad social
- Informes de las comisiones de derechos humanos o informes del Defensor del Menor
- Estudios sobre las víctimas

- Informes de organizaciones no gubernamentales relativos a la victimización del niño
- Informes de organizaciones que prestan servicios de apoyo, como las que se ocupan de proporcionar asesoramiento a niños víctimas de traumas o violaciones
- Informes de donantes

Existe una gran variedad de fuentes de las que se puede obtener información pertinente, por ejemplo, los ministerios de justicia, los ministerios de asuntos sociales, los ministerios de asuntos de la mujer y la infancia, los especialistas de salud pública que se encargan del tratamiento de niños víctimas de traumas, malos tratos y violaciones, los funcionarios de categoría superior de los servicios de libertad condicional, los jueces, las organizaciones de protección a la infancia, ya sean oficiales o no, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones donantes.

Es probable que resulte difícil encontrar datos exhaustivos y detallados que reflejen con exactitud los índices de victimización del niño y aporten un panorama general de los niños testigos y su experiencia en los procedimientos jurídicos, ya sean penales o de otra índole. Se trata de un área incipiente de la investigación que se ve obstaculizada por el hecho de que, por lo general, los menores comparecen a puerta cerrada y en privado. Es poco probable que en la mayoría de los países se puedan obtener diversas estadísticas detalladas sobre los niños testigos, aunque cabe la posibilidad de que algunos tribunales dispongan de archivos que contengan datos desglosados sobre los menores que han prestado testimonio (por ejemplo, tribunales para los asuntos de la familia, tribunales de menores, tribunales para los asuntos de violencia doméstica, tribunales especializados en delitos sexuales). A escala nacional, regional y local son cada vez más frecuentes los estudios sobre victimización y es importante determinar si en esos estudios los menores son considerados un grupo aparte.

- A. ¿Qué estadísticas sobre victimización del niño y sobre los niños testigos pueden consultarse? Es posible que existan las estadísticas siguientes:
- Datos nacionales sobre los menores que comparecen en calidad de testigos o víctimas en los asuntos penales
 - Estadísticas nacionales sobre los menores que comparecen en calidad de testigos por su condición de víctimas en asuntos no penales (por ejemplo, violencia doméstica, maltrato del niño por los padres)
 - Estadísticas nacionales sobre los niños que requieren una protección especial por haber sido víctimas de malos tratos (por ejemplo, del registro nacional de protección de menores).
 - Datos nacionales, regionales o locales sobre los menores que requieren servicios especializados para poder testificar (utilización de intermediario, testimonio por medio de enlace de video, etc.)
 - Estadísticas nacionales, regionales o locales obtenidas a partir de estudios sobre victimización realizados en la población general.
 - Estadísticas de la policía en que se desglosen los delitos cometidos contra menores de 18 años.
 - Estadísticas de los servicios de fiscalía en que se desglosen las causas penales en que haya habido testigos o víctimas menores de 18 años.
 - Número de delitos cometidos contra menores denunciados por teléfono a través de los centros de llamadas de emergencias u otros servicios concebidos para prestar asistencia a los niños víctimas.
 - Datos en posesión de los organismos de protección de menores
 - Datos sobre los niños testigos que se encuentran a disposición de los tribunales competentes en asuntos de refugiados, de los servicios de inmigración o de las juntas encargadas de tramitar las solicitudes de cualquier forma de residencia presentadas por menores no nacionales o sus padres.
- B. ¿Cuál es el perfil de los niños en las estadísticas antes mencionadas?
- Por sexo
 - Por edad
 - Por grupo o minoría étnicos
 - Por estatuto de ciudadanía (nacional o extranjero)
 - ¿Existe algún otro grupo que esté excesivamente representado?
 - Por categoría de delito (por ejemplo, delito violento o no violento cometido contra menores)

- C. ¿Se pueden desglosar los datos atendiendo al hecho de si el menor conocía o no al autor de los hechos? ¿Y al hecho de si vivía con él o no? ¿En las estadísticas disponibles se puede establecer una distinción respecto de los niños no nacionales no acompañados?
- D. ¿Se dispone de estadísticas sobre el número de niños que recibieron servicios de reinserción social por su condición de víctimas de delitos o testigos en procesos judiciales debidos a la comisión de un hecho delictivo (por ejemplo, procedimientos relacionados con el cuidado y la protección de menores o con la violencia doméstica)? ¿Según las estadísticas, qué profesionales prestaron servicios de reinserción a niños víctimas de delitos (asistentes sociales, psicólogos, asesores, personal sanitario)?
- E. ¿Se pueden consultar estadísticas sobre los niños víctimas de malos tratos o abandono intencional? ¿Sobre los casos en que se ha retirado a los padres la custodia de un niño por medio del sistema de protección de menores? ¿Existen estadísticas sobre los menores que se encuentran en centros de acogida por haber sido objeto de malos tratos o abandono intencional de las personas encargadas de su cuidado?
- F. ¿Se pueden consultar estadísticas anuales sobre el número de niños que han sido víctimas de la trata? ¿O de los niños víctimas de explotación sexual comercial? ¿De qué tipo de explotación fueron víctimas? ¿Existe un registro de las condenas por cualquier forma de posesión o producción de pornografía infantil?

3. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO

3.1 LEGISLACIÓN

- A. En lo que respecta a la detección e investigación de delitos contra los niños, ¿existen leyes, políticas o procedimientos específicos que protejan y promuevan los derechos de esos niños, concretamente en las leyes y reglamentos por los que se rige la policía? ¿Existen procedimientos operativos específicos para la obtención de pruebas a partir de los niños víctimas, y para que la policía informe al menor de su derecho a beneficiarse de prestaciones sanitarias y de otros servicios pertinentes (por ejemplo, servicios psicológicos, asesoramiento jurídico)?
- B. ¿Existe la obligación legal de informar a las autoridades del maltrato o abandono de menores? ¿Quién está obligado a comunicar esos hechos? ¿Tienen esa obligación las personas que desempeñan funciones de autoridad sobre los menores, como profesores, enfermeras y personal dedicado específicamente al cuidado de los niños? ¿Esas personas tienen la obligación de adoptar medidas para garantizar la seguridad del niño y evitar que corra el riesgo de sufrir daños, incluso evitar que sufra nuevos daños?
- C. ¿Existe un marco jurídico o normativo para el seguimiento de los casos comunicados de malos tratos o abandono de menores? ¿Ese marco jurídico o normativo incluye la obligación de proporcionar a los niños víctimas de delitos asistencia y servicios de apoyo, como orientación, asesoramiento jurídico, servicios sociales y de atención médica, servicios de recuperación física y psicosocial?
- D. ¿Existen disposiciones jurídicas para proteger la vida privada y la identidad de los niños víctimas y testigos? ¿Se aplican esas disposiciones de manera efectiva en todos los casos? ¿La información sobre los menores implicados en procesos judiciales está protegida de manera adecuada, por ejemplo, mediante normas que establezcan su no divulgación? ¿Las normas jurídicas estipulan que las comparecencias de los niños víctimas tengan lugar a puertas cerradas sin la presencia de medios de difusión ni público?
- E. ¿Los fiscales están obligados a tener en cuenta las opiniones de las víctimas cuando se vean afectados los intereses personales de estas y a velar por que se les informe de sus derechos de conformidad con la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder? Véase también el módulo **ACCESO A LA JUSTICIA: LA FISCALÍA, sección 5.4.**
- F. ¿Se prevé en la ley el establecimiento de procedimientos en que se tengan en cuenta las necesidades de los niños durante el proceso judicial, como por ejemplo salas de entrevistas adaptadas a los niños, modificación de las salas de audiencia en que deban testificar los niños, pantallas o cristales de visión unilateral para impedir que los acusados vean a los niños testigos, la aceptación de testimonios grabados en video, el testimonio por conducto de un intermediario o utilizando otros medios de ayuda para facilitar el testimonio del niño testigo?
- G. ¿Se prevé en el marco normativo proteger a los niños para evitar que su participación en los procesos judiciales les causen perjuicios, como salas de entrevistas concebidas para ellos, salas de audiencia modificadas teniendo en cuenta las necesidades de los niños testigos, recesos durante el testimonio de un niño y audiencias programadas a horas apropiadas para la edad y madurez del niño? ¿Se entrevista a los niños testigos sin que el presunto autor de los hechos esté presente y existen salas de espera separadas para los niños? **Directriz 31 d) de**

las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos.

- H. ¿Se prevén en la ley otras medidas de protección para garantizar la seguridad y el bienestar del niño, como órdenes de alejamiento para el agresor, órdenes que permitan al niño víctima evitar cualquier contacto directo con el agresor, puesta en libertad bajo fianza en condiciones de “cero contacto” u órdenes de arresto domiciliario del acusado? ¿Esas medidas de protección se aplican en todos los ámbitos en que los niños pueden ser objeto de actos de victimización, incluso en relación con actos delictivos perpetrados por personas ajenas a la familia, violencia doméstica en el hogar y actos perpetrados contra niños víctimas en escuelas e instituciones)?

Nota: en ocasiones será preciso analizar muy diversos textos legislativos para determinar la idoneidad de la protección brindada a los niños víctimas y testigos, incluso legislación en materia de educación y violencia familiar, los códigos penales, las leyes relativas al cuidado y protección de menores, las leyes sobre el divorcio o las leyes de inmigración.

- I. ¿Las normas relativas a los testimonios reflejan correctamente el principio de que la edad no deberá constituir un impedimento para el derecho del niño a participar plenamente en el proceso de justicia, que cada niño tendrá derecho a ser tratado como testigo capaz y a que su testimonio se considere válido y creíble, a menos que se demuestre lo contrario y siempre que por su edad y madurez pueda prestar testimonio de forma inteligible, con o sin el uso de ayudas de comunicación u otro tipo de asistencia?
- J. ¿La ley contempla de manera adecuada algún tipo de reparación a los niños víctimas, ya sea mediante el resarcimiento por orden judicial, programas de justicia restaurativa, programas de indemnización de las víctimas administrados por el Estado o el pago de daños y perjuicios ordenado en procedimientos civiles? ¿La ley prevé compensación en lo que respecta a la reinserción social y educativa del menor, su tratamiento médico y la prestación de servicios jurídicos y de salud mental?
- K. ¿Se prevé en la ley la manera de escuchar la voz de los niños víctimas incluso en los casos en que no testifique, y durante las fases posteriores al proceso, como la admisibilidad de las declaraciones de la víctima sobre las repercusiones durante la fase de sentencia o al considerar la posibilidad de puesta en libertad de un delincuente encarcelado?

3.2 MARCO INSTITUCIONAL

- A. ¿Cuáles son las principales partes interesadas encargadas de la protección de los niños víctimas de delitos? ¿Existen servicios especializados en todas las fases del proceso penal, desde la detención y la instrucción del caso hasta el apoyo y el asesoramiento postraumáticos? ¿El Estado es el principal financiador de esos servicios o intervienen también otras instancias, como organizaciones no gubernamentales y organizaciones de bienestar social? ¿Cuáles son sus respectivos ámbitos de colaboración en el sector, es decir, quién se responsabiliza de cada servicio?
- B. ¿Qué tipo de acceso a la justicia tienen los niños víctimas de delitos, incluso de los delitos de malos tratos y de abandono? ¿Los menores disponen, por ejemplo, de acceso a servicios de asistencia mediante líneas de llamada telefónica gratuita? ¿Pueden obtener con facilidad y de manera gratuita información sobre cómo recibir asistencia en un idioma o en un formato que comprendan?
- C. ¿Los profesionales que trabajan con niños víctimas reciben la capacitación adecuada en lo que respecta a las necesidades de los menores, la detección de

las situaciones de maltrato de niños, la recopilación de pruebas médicas y de otros tipos, el síndrome del niño golpeado y la preparación de juicios en que participen menores (testimonio de menores, por ejemplo)? ¿Esto se aplica en todos los niveles y en las distintas disciplinas, por ejemplo, la policía, los asistentes sociales, el personal sanitario, los fiscales y los jueces? ¿Qué medidas se adoptan para reducir al mínimo el número de profesionales a los que el niño deberá “contar su historia”? ¿Qué estrategias técnicas o de otro tipo se han elaborado para evitar al máximo la exposición de los niños víctimas y testigos a los delincuentes durante todas las fases del procedimiento?

- D. ¿La población se siente confiada en que el sistema de protección de menores promueve eficazmente los derechos de los menores, incluidos sus derechos a un sistema de justicia sensible?
- E. ¿El marco institucional está orientado a satisfacer las necesidades especiales de menores particularmente vulnerables, como las niñas víctimas de agresiones sexuales?

4. NIÑOS VÍCTIMAS

4.1 NIÑOS VÍCTIMAS DE LA TRATA

- A. ¿La ley sanciona adecuadamente la trata de niños tanto nacional como internacional tipificándola como delito penal y previendo recursos eficaces para las víctimas? ¿Se han adoptado medidas jurídicas y administrativas para encontrar lo antes posible y devolver a sus familias a los menores secuestrados dentro de la jurisdicción?

Véase el Artículo 5 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el artículo 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

- B. ¿Tanto la legislación como la práctica indican que los niños víctimas de la trata no son detenidos por la policía ni son objeto de procedimientos penales por delitos relacionados con su condición de víctimas de la trata?
- C. ¿Se han adoptado medidas para impedir el uso de los procedimientos de adopción como instrumento para ocultar la trata de niños? ¿Existen programas nacionales sujetos a plazos específicos para reducir el número de niños expuestos a las peores formas de trabajo infantil, incluidos la trata de niños y la esclavitud u otras formas de servidumbre por deudas?

4.2 NIÑOS VÍCTIMAS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL

- A. ¿Existen disposiciones jurídicas adecuadas para garantizar que no se utilicen, ofrezcan o procuren niños para fines de prostitución, pornografía infantil o espectáculos pornográficos? ¿Constituye un delito poseer, producir o difundir pornografía infantil? ¿Los nacionales o ciudadanos pueden ser procesados por la justicia nacional por delitos cometidos en otros países relacionados con la explotación sexual de niños?
- B. ¿Se trata como niños víctimas a los niños expuestos a la explotación sexual comercial y, en caso de que cometan delitos durante su condición de víctimas de explotación sexual comercial, esos niños quedan exentos de la aplicación de la justicia penal?
- C. ¿La ley establece una edad por debajo de la cual se presume que los niños carecen de capacidad de consentimiento para participar en actividades sexuales? ¿Cuál es esa edad? ¿La edad es la misma para las niñas y para los niños?
- D. ¿Se han adoptado medidas para impedir que los niños víctimas de explotación sexual sean objeto de otras formas de victimización durante la fase de instrucción, la intervención y demás procesos jurídicos o administrativos?

5. GESTIÓN / COORDINACIÓN

5.1 CUESTIONES GENERALES

- A. ¿Existe un marco nacional, regional o local para garantizar la coordinación de las actividades de todo el personal que trabaja con los niños víctimas? ¿Quiénes son los interesados directos? ¿Esa coordinación está prevista en la ley? ¿A qué autoridad debe responder el mecanismo de coordinación? ¿Existen informes escritos de acceso público? ¿Con qué frecuencia se reúne el mecanismo de coordinación (trimestralmente, mensualmente)? ¿El organismo coordinador incluye a todos los proveedores de servicios a los niños víctimas (policía, servicios de fiscalía, tribunales, servicios de bienestar social y todas las instituciones relacionadas con el sistema de atención y protección del niño)? De no ser así, ¿existen otros mecanismos de coordinación que se encarguen de determinados aspectos del sistema (por ejemplo, en relación con la trata de niños, el trabajo infantil, la atención y protección de menores)?
- B. ¿Qué ministerios y departamentos u organismos gubernamentales participan en la prestación de servicios a los niños víctimas (fiscales, asistentes sociales, policía, funcionarios del ministerio del trabajo)? ¿Cómo se estructura la gestión de los servicios en cada uno de ellos? ¿Cada organización u organismo cuenta con una dependencia especializada en el trabajo con niños víctimas? ¿Los funcionarios de esas dependencias reciben capacitación especializada sobre los derechos, el desarrollo y la psicología del niño?
- C. ¿Cómo se formulan las políticas relativas a los niños víctimas? ¿Cómo se revisan y aplican esas políticas? ¿Existen protocolos o estrategias nacionales dirigidos a fomentar la cooperación entre los proveedores de servicios a los niños víctimas y testigos? **Directriz 44 de las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos.** ¿Existen normas escritas sobre los diferentes aspectos, como directrices escritas para los fiscales que trabajan con niños víctimas o testigos, el acceso a los programas de protección de testigos y protocolos de acción relativos a los niños víctimas de violencia doméstica?
- D. ¿Existen normas escritas para los proveedores de servicios y para los funcionarios y organismos gubernamentales que trabajan con niños dentro del sistema de justicia sobre cómo debe tratarse a los niños víctimas o testigos?
- E. ¿Se han adoptado medidas para garantizar la cooperación internacional en lo referente a la trata de niños y a los niños extranjeros no acompañados? ¿Existen mecanismos nacionales, regionales o locales eficaces de control de los procesos de adopción internacional para prevenir la trata de niños? ¿Se han adoptado medidas para facilitar la recopilación y el intercambio de información y el descubrimiento y la investigación de los delitos transnacionales relacionados con niños víctimas y testigos? **Directriz 45 de las Directrices de las Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos.**
- F. ¿Existen grupos de niños víctimas y testigos vulnerables no previstos en las leyes, políticas o prácticas nacionales? De ser así, ¿de qué grupos se trata? ¿Qué se está haciendo para que se adopten medidas eficaces en relación con esos grupos?
- G. ¿Se selecciona y capacita a las personas que trabajan con niños testigos de forma tal que estén en condiciones de atender a las necesidades especiales de los niños testigos?

En la **directriz 43** de las **Directrices de las Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos** se establece que la capacitación de profesionales que trabajan con niños testigos debería incluir:

- Las reglas y normas pertinentes en materia de derechos humanos, incluidos los derechos del niño;
- Los principios y deberes éticos de su función;
- Técnicas apropiadas de comunicación entre adultos y niños;
- Métodos para proteger y presentar las pruebas y para interrogar a niños testigos; y
- La función que desempeñan los profesionales que trabajan con niños víctimas y testigos y los métodos conexos utilizados.

5.2 CONTROL FISCAL Y PRESUPUESTOS

- A. ¿Cómo se financian los servicios prestados a los niños víctimas y testigos? ¿Existe un presupuesto central, o se asignan aspectos a distintos departamentos gubernamentales (por ejemplo, la policía, la fiscalía y los servicios de bienestar social)? De ser así, ¿quién determina las asignaciones presupuestarias? ¿Quién prepara y presenta el presupuesto? ¿Quién supervisa la utilización eficaz de las asignaciones presupuestarias?
- B. ¿Se pueden desglosar y definir los gastos en concepto de servicios destinados a los niños víctimas y testigos en los procesos presupuestarios nacionales, provinciales o locales? ¿El presupuesto de la justicia penal prevé asignaciones para los servicios destinados a los niños víctimas y testigos? De ser así, ¿qué proporción del presupuesto de la justicia penal representa? ¿Y qué proporción de los gastos en concepto de servicios destinados a los niños (servicios de protección o de bienestar social del niño)?
- C. Si el presupuesto se ejecuta a escala nacional, regional o local, ¿resulta suficiente para sufragar los gastos relativos a las tareas, los programas, las actividades y el personal? ¿En los presupuestos anuales se prevé la existencia de suficiente personal capacitado para brindar servicios a los niños víctimas y testigos, en particular servicios de bienestar social, asesoramiento, reinserción y apoyo psicológico?
- D. En los casos en que se cuente con asignaciones presupuestarias, ¿se reciben estas a tiempo? ¿Existen otras restricciones fiscales que dificulten la gestión y prestación adecuadas de los servicios destinados a los niños víctimas y testigos?
- E. ¿Se prevén asignaciones presupuestarias para el aseguramiento de infraestructuras tales como salas de entrevistas adaptadas a las necesidades de los niños y equipamiento (medios de ayuda para facilitar el testimonio del niño y equipo de grabación)?
- F. En caso de que organizaciones no gubernamentales intervengan en la prestación de servicios a los niños víctimas y testigos, ¿de qué fondos disponen para ello? ¿Reciben fondos del gobierno? De ser así, ¿resultan suficientes para prestar los servicios requeridos? ¿Reciben fondos de donantes? ¿Cómo pueden las organizaciones no gubernamentales que prestan los servicios requeridos mantener su sostenibilidad fiscal?

5.3 COORDINACIÓN DE DONANTES

- A. ¿Qué donantes o asociados para el desarrollo trabajan activamente en el sector de la protección de menores en lo que respecta a los niños víctimas y testigos? ¿El apoyo de los donantes está orientado a grupos específicos de niños víctimas, por ejemplo víctimas de agresiones sexuales, víctimas de la trata o niños extranjeros no acompañados?

- B. ¿Existen planes estratégicos de donantes para coordinar y dirigir estratégicamente los servicios destinados a los niños víctimas y testigos?
- C. ¿Qué proyectos relacionados con los niños víctimas y testigos han contado con el apoyo de organismos donantes? ¿Qué proyectos se ejecutan actualmente? ¿Se evaluaron los proyectos ejecutados y, de así ser, qué enseñanzas se pueden extraer?
- D. ¿Qué vínculos existen entre los organismos donantes y los ministerios u otro tipo de organismos (por ejemplo, autoridades locales, tribunales administrativos, entidades profesionales de asistencia jurídica) que participan en el sistema de justicia de menores? ¿Cómo se gestionan las relaciones entre los organismos donantes y otras entidades? ¿Existe algún acuerdo oficial o documento de estrategia en vigor?
- E. ¿Existen programas internacionales de asistencia técnica sobre cuestiones relacionadas con los niños víctimas, por ejemplo sobre la trata de niños o el trabajo en condiciones de peligro o explotación? ¿Quién se ocupa de la asistencia técnica en ese ámbito y cómo se coordinan las actividades?

5.4 INVESTIGACIÓN

- A. ¿Se han llevado a cabo estudios sobre las causas, las tendencias y los problemas relativos a la victimización de menores, incluida cualquier forma de violencia o maltrato? ¿Esos estudios y sus resultados son de acceso público? ¿Se pueden consultar estudios sobre los niños víctimas especialmente vulnerables, como los niños víctimas de la trata o de prácticas de trabajo en condiciones de peligro o explotación?
- B. ¿Existen políticas, programas y servicios para los niños víctimas y testigos basados en estudios científicos apropiados, detallados y específicos? ¿Se actualizan periódicamente los trabajos de investigación a fin de reflejar los cambios sociales que se registren u otras nuevas circunstancias?
- C. ¿Existe una estrategia nacional, regional o local para reducir la victimización del niño y prevenir cualquier forma de maltrato o abandono? ¿Hasta qué punto existen estrategias nacionales de lucha contra la pobreza y programas de apoyo y asistencia social para evitar la victimización del niño como resultado de la explotación sexual, la trata y el trabajo? ¿Se aplican y evalúan esas estrategias de manera efectiva? ¿Existe un proceso de recopilación ordinaria y sistemática de datos que permita obtener la información mínima necesaria para comprobar la mejora de los servicios destinados a los niños víctimas y testigos, y cuantificar cualquier reducción de la victimización del niño? ¿Se ha establecido un proceso de reunión ordinaria y periódica de los datos necesarios para disponer de la información mínima?

¹ UNICEF, 2005, pág. 2.

² La remisión suele consistir en la sustitución de los procedimientos judiciales por otros tipos de programas o penas sustitutivas de servicios a la comunidad para la resolución de los asuntos.

³ Defensa de los Niños – Internacional, “*Kids behind bars*” (2006).

⁴ *Innocenti Digest* Núm. 3 “Juvenile Justice”, UNICEF, Florencia, 1998.

⁵ Directriz núm. 8.

⁶ Por privación de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública. (Regla 11 b) de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad). Lo anterior podría comprender diversas instituciones como comisarías de policía, centros de detención, cárceles, incluso cárceles de adultos, escuelas especializadas en régimen cerrado, reformatorios o establecimientos de reinserción, establecimientos cerrados para menores en espera de juicio y centros de tratamiento utilizados para la aplicación de penas (centros de tratamiento de drogodependientes).

⁷ Como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al pronto acceso a asistencia jurídica, el derecho a ser informado de los cargos que pesan contra él y el derecho a que la causa sea dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley.

⁸ Manual del UNICEF y la UNODC para cuantificar los indicadores de la justicia de menores (2006).

⁹ Véanse las Directrices de Acción de las Naciones Unidas sobre el niño en el sistema de justicia penal, directriz núm. 17.

¹⁰ Definiciones contenidas en el documento “Principios básicos de las Naciones Unidas sobre la utilización de programas de justicia restitutiva en materia penal”, E/2002/INF/2/Add.2.

¹¹ Manual del UNICEF y la UNODC para cuantificar los indicadores de la justicia de menores, indicador núm. 13.

¹² J. Becker: “Child soldiers: Changing a culture of violence” (2005) 32, *Human Rights Winter* 16.

¹³ Normalmente, el porcentaje de mujeres en prisión en su conjunto, incluidas las mantenidas en prisión preventiva, oscila entre el 2% y el 9% en todo el mundo. Véase también el módulo Medidas privativas y no privativas de la libertad: Detención previa a la sentencia, sección 5.2.

¹⁴ Véase además la resolución 45/115 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1990, relativa a la utilización de niños como instrumento para las actividades delictivas.

¹⁵ Véase www.coav.org para obtener información sobre proyectos y trabajos de investigación relativos a los niños implicados en violencia armada organizada fuera de situaciones de conflicto armado. Véase también C. Franck: “Children in organized armed violence”, vol. 8 (1), art. 40, pág. 6, en www.communitylawcentre.org.

¹⁶ Véase la resolución 43/121 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1988, relativa a la utilización de niños en el tráfico ilícito de estupefacientes y rehabilitación de los menores farmacodependientes.

¹⁷ Véase el preámbulo de las Directrices de Acción de las Naciones Unidas sobre el niño en el sistema de justicia penal.

¹⁸ UNICEF y UNODC, indicador núm. 15.

¹⁹ Resolución 55/25 de la Asamblea General, de 15 de noviembre de 2000.

²⁰ Resolución 2005/20 del ECOSOC, de 22 de julio de 2005.

²¹ En la directriz 8 c) i) se establece lo siguiente: Todo niño tiene derecho a la vida y la supervivencia y a que se le proteja contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el abuso o el descuido físico, psicológico, mental y emocional.

²² En la directriz 8 c) ii) se establece lo siguiente: Todo niño tiene derecho a crecer en un ambiente armonioso y a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. En el caso de un niño que haya sido traumatizado, deberán adoptarse todas las medidas necesarias para que disfrute de un desarrollo saludable.

ANEXO A. DOCUMENTOS BÁSICOS

NACIONES UNIDAS

- Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984
- Convención sobre los Derechos del Niño, 1989
- Organización Internacional del Trabajo, Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
- Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 2000
- Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, 2000
- Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000
- Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, 2002 (en vigor desde 2006)
- Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (documento A/RES/40/34 de las Naciones Unidas)
- Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, 1985 (Reglas de Beijing)
- Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, 1988
- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para las sanciones no privativas de libertad, 1990 (Reglas de Tokio)
- Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, 1990
- Directrices de Acción sobre el niño en el sistema de justicia penal, 1997
- Principios rectores de la reducción de la demanda de drogas, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1998
- Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restitutiva en materia penal, 2002
- Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, 2005
- Observación general núm. 6 del Comité de los Derechos del Niño relativa al “Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen”, 2005
- Resolución 43/121 (1988) de la Asamblea General relativa a la utilización de niños en el tráfico ilícito de estupefacientes y rehabilitación de los menores farmacodependientes, 1988
- Resolución 45/115 de la Asamblea General, de 1990, relativa a la utilización de niños como instrumento para las actividades delictivas
- *Handbook on Alternatives to Imprisonment*, UNODC, 2006
- *Handbook on Restorative Justice*, UNODC, 2006
- Manual para cuantificar los indicadores de la justicia de menores, UNICEF/UNODC, 2006
- Manual de capacitación sobre justicia de menores, UNICEF y Reforma Penal Internacional, 2006

FUENTES REGIONALES

- Carta africana de derechos humanos y de los pueblos, 1986
- Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, 1990
- Consejo de Europa, Convenio sobre el delito cibernético, 2003
- Consejo de Europa, Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 1953
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969
- Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, resolución XXX de la OEA aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana

- Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, 1989

LIBROS / ARTÍCULOS

- Defensa de los Niños – Internacional, “Kids behind bars” (2006)
- Innocenti Digest Núm. 3 “Juvenile Justice”, UNICEF, Florencia, 1998
- Gallinetti, J. y Sloth-Nielsen, J. (eds.): Child Justice in Africa: A Guide to Good Practice, Children’s Rights Project, Community Law Centre, University of the Western Cape, 2004
- Hodgkin, R. y Newell, P.: *Manual de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño*, edición revisada, UNICEF, Ginebra, 2002
- Van Bueren, Geraldine: The International Law on the Rights of the Child, 1998
- Wernham, Marie: An outside chance, Street Children and Juvenile Justice – An International Perspective, Consortium for Street Children
- Wernham, M., Geerickx, S. y Jackson, E.: Police Training on Child Rights and Child Protection: Lessons Learned and Manual
- Protegiendo los derechos del niño en conflicto con la ley, Panel de coordinación de organizaciones relacionadas con la justicia de menores: programa y experiencias promocionadas por las organizaciones miembros, 2005
- Cappelaere, Geert y Grandjean, Anne: Enfants privés de liberté, Droits et réalités, Éditions Jeunesse et Droit, Lieja (Bélgica), 2000.

OTRAS FUENTES ÚTILES

NACIONES UNIDAS

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

- Observación general núm. 13 “Artículo 14 (Administración de Justicia)” (21º período de sesiones, 1984), Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos (1992), documento HRI/GEN/1, 32 de las Naciones Unidas
- Observación general núm. 17 “(Artículo 24) Los derechos del niño” (35º período de sesiones, 1989)
- Observación general núm. 20 relativa a la prohibición de la tortura y penas o tratamientos crueles (44º período de sesiones, 1992), reproducido en el documento HRI/GEN/1, 29 de las Naciones Unidas

FUENTES REGIONALES

- Declaración de Abuja sobre medidas sustitutivas de la privación de libertad. La Declaración de Abuja fue aprobada en una conferencia nacional sobre medidas sustitutivas de la privación de libertad celebrada en Abuja del 8 al 10 de febrero de 2000.
- Conferencia Internacional Americana, 1948
- Declaración de Bangkok por la que se hace un llamamiento a adoptar medidas contra la delincuencia organizada y el terrorismo, 2005
- Declaración de Kampala sobre las condiciones penitenciarias en África, 1996

FUENTES NACIONALES

- Constitución
- Leyes relativas a la protección de menores
- Legislación en materia de justicia de menores
- Legislación por la que se rigen los servicios sociales o del sector de bienestar social
- Legislación por la que se rigen las instituciones relacionadas con la justicia de menores (instituciones penales, cárceles, centros educativos y centros de bienestar social)
- Código penal y ley de procedimiento penal
- Instrumentos legislativos de aplicación penal (incluidas las leyes sobre libertad condicional)
- Leyes relativas a la trata de personas
- Leyes sobre el trabajo infantil y legislación laboral
- Leyes sobre inmigración

- Informes de investigaciones y de evaluaciones elaborados por organismos independientes, organizaciones no gubernamentales y académicos
- Informes de las comisiones nacionales de derechos humanos o de otros órganos independientes que se ocupan de la supervisión de la situación de personas privadas de libertad

SITIOS WEB

- Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil: UU <http://www.juvenilejusticepanel.org> (enlaces con todas las organizaciones miembros y todos los recursos)
- Red de Información sobre los Derechos del Niño: <http://www.crin.org>
- Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y de la Familia, <http://www.judgesandmagistrates.org>
- Amnistía Internacional: www.amnesty.org
- Niños en situaciones de violencia armada organizada: <http://www.coav.org.br>
- Human Rights Watch: <http://www.hrw.org>

ANEXO C. GUÍA O LISTA DE VERIFICACIÓN DEL EVALUADOR: NIÑOS VÍCTIMAS Y TESTIGOS

El cuadro siguiente está destinado a ayudar al evaluador a mantener un control de los temas tratados, con qué fuentes y con quién.

	TEMA	FUENTES	CONTACTOS	TERMINADO
2.0	PANORAMA GENERAL: ESTADÍSTICAS Y DATOS GENERALES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informes del Ministerio de Justicia ▪ Informes del Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia ▪ Informes de la Junta de Justicia de Menores ▪ Informes del sistema de justicia penal, incluidos la fiscalía y los sistemas penitenciario y de libertad condicional ▪ Informes sobre delincuencia de la Policía Nacional ▪ Informes anuales de los tribunales ▪ Informes del Departamento de Bienestar Social ▪ Informes de la Comisión de Derechos Humanos ▪ Informes de los servicios de asistencia jurídica ▪ Informes de las instituciones de enseñanza o de formación relativos a los lugares a los que pueden ser remitidos menores por decisión judicial ▪ Informes sobre las instituciones privadas que acogen a menores detenidos o que cumplen otros tipos de penas, o informes de esas instituciones ▪ Estudios sobre las víctimas ▪ Informes de ONG sobre la victimización del niño ▪ Informes de organizaciones que brindan servicios de apoyo a los niños víctimas, como el asesoramiento a niños víctimas de traumas o violaciones) ▪ Informes de los donantes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ministerio de Justicia ▪ Ministerio de Asuntos de la Mujer y de la Infancia ▪ Ministerio de Bienestar Social ▪ Fiscalía ▪ Funcionarios superiores del servicio de prisiones ▪ Inspectores y oficiales superiores de la policía ▪ Funcionarios superiores de los servicios de libertad condicional ▪ Tribunales de asuntos de la familia, tribunales de menores, tribunales especializados en asuntos de violencia doméstica, tribunales especializados en delitos sexuales ▪ Comisión de Derechos Humanos ▪ Servicios de asistencia jurídica ▪ Instituciones de enseñanza y de formación ▪ Centros de tratamiento de drogodependientes ▪ Defensor del Menor ▪ Comités de las Naciones Unidas ▪ Organizaciones regionales ▪ Jueces de los tribunales superiores y otros jueces superiores ▪ ONG que trabajan en el ámbito de la justicia penal ▪ Organizaciones intergubernamentales ▪ Organizaciones donantes que trabajan en el sector de la justicia penal 	

	TEMA	FUENTES	CONTACTOS	TERMINADO
3.0	MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO: EL DERECHO Y LA PRÁCTICA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Constitución ▪ Código penal ▪ Código de procedimiento penal ▪ Código de aplicación penal ▪ Normas relativas a las pruebas ▪ Disposiciones conexas de esos códigos y normas ▪ Enmiendas de todas las leyes antes mencionadas ▪ Leyes relativas a la protección de la infancia ▪ Normas sobre los procedimientos de los tribunales ▪ Leyes por las que se rigen los sistemas de justicia semiformales e informales ▪ Directivas ▪ Libros blancos sobre la delincuencia, las penas, la detención, etc. ▪ Reglamentos ▪ Informes o documentos temáticos de la comisión legislativa ▪ Textos sobre reformas legislativas presentados en el parlamento ▪ Instrumentos internacionales pertinentes ratificados por un país ▪ Instrumentos regionales pertinentes ratificados por un país ▪ Instrucciones y circulares sobre la práctica judicial ▪ Informes independientes elaborados por organizaciones no gubernamentales ▪ Manuales jurídicos e investigaciones académicas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ministerio de Justicia ▪ Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia ▪ Comisión de Derechos Humanos ▪ Servicios de asistencia jurídica ▪ Órganos establecidos en virtud de tratados regionales y de tratados de las Naciones Unidas ▪ Funcionarios superiores de los servicios de libertad condicional ▪ Funcionarios superiores del servicio de prisiones ▪ Oficinas legislativas (del ámbito local, provincial y nacional) ▪ Oficinas de reforma legislativa ▪ Juez del Tribunal Superior y personal judicial superior ▪ Asistentes sociales, psicólogos y psiquiatras ▪ Agentes de la policía (investigadores y agentes que trabajan en los servicios de protección de menores) ▪ Escuelas de derecho e instituciones académicas ▪ Personas con autoridad sobre los menores (profesores, enfermeras, personal de centros destinados a menores) ▪ Asociaciones de abogados ▪ Tribunales locales ▪ Oficinas locales de libertad condicional y otros órganos pertinentes 	

	TEMA	FUENTES	CONTACTOS	TERMINADO
3.1	MARCO INSTITUCIONAL	<p>Véanse las SECCIONES 2.0 y 3.0 <i>supra</i> Además:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informes de los tribunales ▪ Informes de tribunales comunitarios o tribales ▪ Planes de estudios de escuelas o universidades en que se forman jueces, fiscales, agentes de policía, psiquiatras, asistentes sociales, intérpretes, etc. ▪ Informes de cursos de capacitación de jueces, agentes de policía, psiquiatras, asistentes sociales y personal de ONG que trabajan con niños víctimas ▪ Informes de evaluaciones de las aptitudes del personal que trabaja con niños víctimas y testigos ▪ Cualquier examen institucional realizado por un órgano independiente ▪ Encuestas o evaluaciones sobre el sistema de protección de menores ▪ Informes de los programas de protección de testigos ▪ Informes de los medios de difusión <p>VISITAS SOBRE EL TERRENO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comisaría de policía ▪ Escuelas y universidades ▪ Tribunales que se ocupen de niños víctimas o testigos en contacto con el sistema de justicia penal ▪ Centros de acogida de menores que acojan a niños víctimas o testigos ▪ ONG que ofrezcan servicios a niños víctimas o testigos 	<p>Véanse las SECCIONES 2.0 y 3.0 <i>supra</i> Además:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Secretarios judiciales, intérpretes y personal de tribunales ▪ Antiguos niños víctimas o testigos ▪ Familiares de antiguos niños víctimas o testigos ▪ Formadores o personal académico que trabaje con jueces, agentes de policía, psiquiatras, asistentes sociales y personal de ONG ▪ Personal de ONG que ofrezcan servicios a niños víctimas o testigos ▪ Asociaciones médicas ▪ Asociaciones de psiquiatras 	
4	CUESTIONES ESPECÍFICAS	Véase <i>infra</i>	Véase <i>infra</i>	
4.1	NIÑOS VÍCTIMAS DE LA TRATA	<p>Véanse las SECCIONES 2.0, 3.0 y 3.1 <i>supra</i> Además:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informes de ONG ▪ Informes de examen de diversos organismos sobre la reclusión de menores ▪ Informes de los tribunales de menores ▪ Informes de profesionales que trabajan en el ámbito de la trata de personas ▪ Acuerdos de cooperación bilateral o multilateral sobre la trata de personas ▪ Informes de organismos de las Naciones Unidas como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 	<p>Véanse las SECCIONES 2.0, 3.0 y 3.1 <i>supra</i> Además:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Asistentes sociales ▪ Organizaciones intergubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch ▪ Tribunales de apelaciones ▪ Asociaciones médicas ▪ Asociaciones de psiquiatras ▪ OIM 	
		▪	▪	

	TEMA	FUENTES	CONTACTOS	TERMINADO
4.3	NIÑOS VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL	Véanse las SECCIONES 2.0, 3.0, 3.1 y 4.1 <i>supra</i> Además: <ul style="list-style-type: none"> Entrevistas con clientes de niños víctimas de explotación sexual comercial Entrevistas con niños víctimas de explotación sexual comercial 	Véanse las SECCIONES 2.0, 3.0, 3.1 y 4.1 <i>supra</i> Además: <ul style="list-style-type: none"> Familiares de niños víctimas de explotación sexual comercial Niños víctimas de explotación sexual comercial 	
5	COORDINACIÓN DEL SISTEMA	Véase <i>infra</i>	Véase <i>infra</i>	
5.1	CUESTIONES GENERALES	Véanse las SECCIONES 2.0, 3.0, 3.1, 3., 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 <i>supra</i> Además: <ul style="list-style-type: none"> Documentos presupuestarios e informes financieros de los servicios sociales, los servicios de empleo y de vivienda, y los servicios de salud, en caso de que presten algún tipo de asistencia a antiguos reclusos Directorio de ONG y organizaciones relacionadas con el ámbito de la justicia de menores Libros blancos para los proveedores de servicios Directrices para los proveedores de servicios Normas mínimas para la ejecución de cualquier programa de remisión de casos Criterios para participar en actividades o prestar servicios relacionados con los niños víctimas y testigos 	Véanse las secciones 2.0, 3.0, 3.1, 3., 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 <i>supra</i> Además: <ul style="list-style-type: none"> Personal responsable de los informes financieros y la contabilidad Directores de ONG Universidades e instituciones académicas 	
5.2	CONTROL FISCAL Y PRESUPUESTOS	<ul style="list-style-type: none"> Documentos normativos gubernamentales y programas nacionales de reforma Informes del Ministerio de Finanzas Documentos presupuestarios e informes financieros de organismos gubernamentales que trabajen en el sector de la justicia de menores Documentos presupuestarios e informes financieros de ONG y organizaciones intergubernamentales que trabajen con niños víctimas y testigos Informes del Auditor General Informes de comisiones u órganos de lucha contra la corrupción Visitas sobre el terreno para reunir información sobre la utilización de los fondos Informes de transferencias bancarias y retiro de fondos 	<ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Finanzas Ministerio de Justicia Documentos normativos gubernamentales y programas nacionales de reforma Comisiones u órganos de lucha contra la corrupción Auditor General 	

	TEMA	FUENTES	CONTACTOS	TERMINADO
5.3	COORDINACIÓN Y ALIANZAS CON DONANTES	<ul style="list-style-type: none"> Documentos de estrategia de donantes Informes de las organizaciones donantes sobre la marcha de sus actividades Estudios independientes realizados por universidades y ONG Documentos de estrategia del Ministerio de Justicia relativos a la cooperación y la coordinación con los donantes Informes y documentos de redes que trabajen con niños víctimas y testigos Directorio de donantes y ONG que se ocupan de los niños víctimas y testigos Informes de las instancias gubernamentales encargadas de regular la actividad de los donantes y conceder las licencias pertinentes 	<ul style="list-style-type: none"> Organizaciones donantes Ministerio de Justicia Administradores del sistema penal y del sistema de libertad condicional Responsables de las redes ONG, universidades e instituciones académicas 	
5.4	INVESTIGACIÓN	<p>Véanse las SECCIONES 2.0, 3.0, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 <i>supra</i></p> <p>Además:</p> <ul style="list-style-type: none"> Planes estratégicos para tratar con niños víctimas y testigos Documentos normativos gubernamentales sobre cuestiones relacionadas con los niños víctimas y testigos Libros blancos sobre los niños víctimas y testigos Informes del Colegio de Abogados Informes y entrevistas: Autoridades judiciales Informes y entrevistas: Fiscales Informes y entrevistas: Asistentes sociales y expertos médicos 	Véanse las SECCIONES 2.0, 3.0, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 <i>supra</i>	



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Dependencia de Reforma de la Justicia Penal
Centro Internacional de Viena, Apartado postal 500, 1400 Viena, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org
E-mail: criminal.justice@unodc.org

Publicación de las Naciones Unidas
Impreso en Austria



V.10-53573—Agosto de 2010